

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

**“LA PENA EFECTIVA EN EL DELITO DE AGRESIONES EN
CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO
FAMILIAR EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE PIURA”**

Presentada por:

Br. Karen Yessenia Guerrero Peña

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Línea de Investigación Institucional:

Legislación y Ciencias Políticas

Sub Línea de Investigación:

Derecho Penal: Nuevas Tendencias

**PIURA – PERÚ
2018**

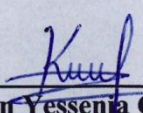
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS




TESIS

**“LA PENA EFECTIVA EN EL DELITO DE AGRESIONES EN
CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO
FAMILIAR EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE PIURA”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO


Br. Karen Yessenia Guerrero Peña
Ejecutor


Mag. Andrés Ernesto Villalta Pulache
Asesor

Línea de Investigación Institucional:

Legislación y Ciencias Políticas

Sub Línea de Investigación:

Derecho Penal: Nuevas Tendencias

**PIURA – PERÚ
2018**


DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS

Yo: **KAREN YESSÉNIA GUERRERO PEÑA** identificada con DNI N° **48134565**, en la condición de Bachiller de la Facultad de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**, Escuela Profesional de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS** y domiciliada en **AA.HH. Las Mercedes Mz A1 LOTE 02** Distrito de Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura, Celular: **969588830**, Email: **karenz-1994@hotmail.com**.

DECLARO BAJO JURAMENTO: que la tesis que presento es original e inédita, no siendo copia parcial ni total de una tesis desarrollada, y/o realizada en el Perú o en el Extranjero, en caso contrario de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. N° 411, del Código Penal concordante con el Art. 32° de la Ley N° 27444, y Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor. En fe de lo cual firmo la presente.



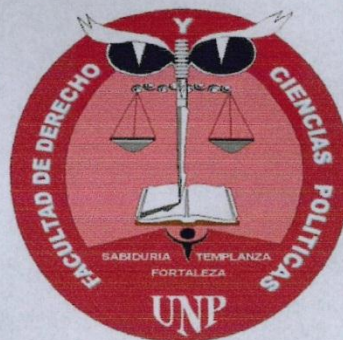
Piura, diciembre de 2018


Karen Yessénia Guerrero-Pena
DNI N° 48134565

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Art. 4. Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales –RENATI Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD

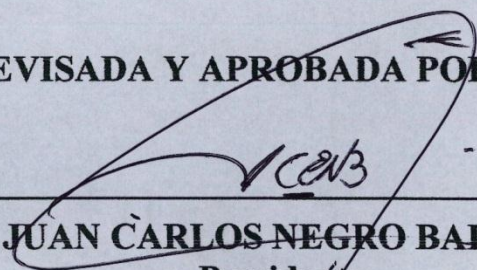
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



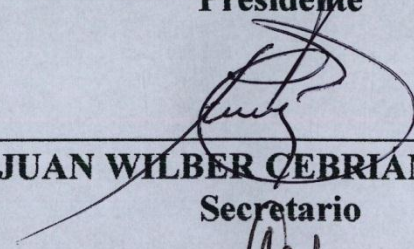
TESIS

**“LA PENA EFECTIVA EN EL DELITO DE AGRESIONES EN
CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO
FAMILIAR EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE PIURA”**

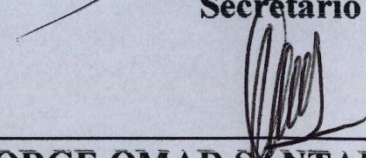
TESIS REVISADA Y APROBADA POR EL JURADO



Dr. JUAN CARLOS NEGRO BALAREZO
Presidente



Dr. JUAN WILBER CEBRIAN BARZOLA
Secretario



Mag. JORGE OMAR SANTAMARÍA MORILLO
Vocal

PIURA – PERÚ
2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
001-UI-FDCCP-UNP-2019

Los miembros del Jurado Calificador que suscriben, reunidos para evaluar la Tesis titulada: **"LA PENA EFECTIVA EN EL DELITO DE AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE PIURA"** presentada por la Bachiller **KAREN YESSSENIA GUERRERO PEÑA**, con el asesoramiento del Mag. Andrés Ernesto Villalta Pulache; oídas las observaciones y respuestas a las preguntas formuladas y, de conformidad al Reglamento de Tesis para la obtención del Título Profesional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la declaran:

APROBADA (X)

DESAPROBADA ()

Con la mención de:

SOBRESALIENTE

- (X) En consecuencia, queda en condición de ser ratificado por Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado.
- (X) En consecuencia, queda en condición de ser ratificado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado, después de que la sustentante incorpore las sugerencias del Jurado Calificador.

Piura, 12 de enero de 2019

DR. JUAN CARLOS NEGRO BALAREZO
PRESIDENTE

DR. JUAN WILBER CEBRIÁN BARZOLA
SECRETARIO

MAG. JORGE OMAR SANTA MARÍA MORILLO
VOCAL

DEDICATORIA

*A mis padres,
Mariela y Dionisio,
por su amor y apoyo
incondicional.*

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios, por darme la fortaleza para superar cada obstáculo.

A los docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por la instrucción brindada durante mi formación académica.

A la Dra. Esthely Bayona Castro, por el apoyo, orientación y la información brindada para poder desarrollar mi tesis.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	14
CAPÍTULO I	15
ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA.....	15
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	15
1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN	16
1.3. OBJETIVOS	17
1.3.1. Objetivo General	17
1.3.2. Objetivo Específico	17
1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	17
1.4.1. Delimitación Espacial	17
1.4.2. Delimitación Temporal	17
CAPÍTULO II.....	18
MARCO TEÓRICO	18
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	18
2.2. BASES TEÓRICAS	19
2.2.1. Pena Efectiva.....	19
2.2.2. Agresiones contra la mujer y grupo familiar	20
2.2.3. Ministerio Público	24
2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS (Poder Judicial del Perú, 2018).....	26
2.4. MARCO REFERENCIAL	29
2.4.1. Derecho Penal	29
2.4.1.1. La Política Criminal	30
2.4.1.2. Teoría de la pena	31
2.4.1.3. El <i>Ius Puniendi</i> del Estado	36
2.4.1.4. Los límites al <i>Ius Puniendi</i> del Estado	37
2.4.1.5. La pena	43
2.4.2. Violencia contra la mujer y grupo familiar	52
2.4.2.1. Violencia contra la mujer	52
2.4.2.2. Violencia contra el grupo familiar.....	52
2.4.2.3. Ciclo de la violencia familiar	53
2.4.2.4. Ley N° 30364	54
2.4.2.5. Tipo penal de agresiones contra la mujer y grupo familiar	58

2.4.3.	Violencia familiar en el Derecho Comparado	60
2.5.	HIPÓTESIS	64
2.5.1.	Hipótesis General	64
2.5.2.	Hipótesis Específica	64
CAPÍTULO III	65
MARCO METODOLÓGICO	65
3.1.	ENFOQUE Y DISEÑO.....	65
3.1.1.	Enfoque	65
3.1.2.	Diseño	65
3.2.	MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	65
3.3.	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	66
3.4.	ASPECTOS ÉTICOS	67
CAPÍTULO IV	68
PROBANZA DE LA HIPÓTESIS	68
4.1.	Probanza Jurídico-Doctrinal.....	68
CONCLUSIONES	74
RECOMENDACIONES	75
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	76
ANEXOS	78
APÉNDICE	81

ÍNDICE DE ANEXOS

1. Matriz básica de consistencia.....	79
2. Solicitud de Acceso a la Información.....	80

ÍNDICE DE APÉNDICE

Decreto Legislativo N° 1323.....82

Ley N° 30710.....90

RESUMEN

Una de las medidas legislativas más recientes en materia de violencia familiar, fue la modificación del artículo 57° del Código Penal, mediante la cual se prohíbe la aplicación de la suspensión de la pena y se dispone sancionar con pena privativa de libertad efectiva, en casos de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, delito regulado en el artículo 122-B del mismo cuerpo normativo; por lo que, en la presente investigación se analiza la efectividad producida por dicha medida para combatir este problema social.

Teniendo en cuenta la fecha en que se realizó dicha variación legislativa, 29 de diciembre de 2017, y en base al número de denuncias de violencia familiar que ingresaron al Ministerio Público de Piura, desde el mes de julio de 2017 hasta junio de 2018, se concluye que la misma, no ha tenido el resultado esperado, pues los índices de violencia familiar se han incrementado significativamente. Por tanto, se debe precisar que la función pedagógica que se atribuye al Derecho Penal para transmitir mensajes de prohibición de determinadas conductas, como la violencia contra la mujer y grupo familiar, no debe tenerse en cuenta a efectos de lograr la prevención de las mismas. Por el contrario, debe tenerse presente que no solo se trata de un problema de criminalidad que se puede resolver penalizando conductas o mediante el incremento o endurecimiento de penas; es decir, debe descartarse que el Derecho Penal es un instrumento capaz de poner fin a un problema como el de la violencia familiar, pues la solución al mismo requiere de una serie de instrumentos de control formal e informal que permitan dar una respuesta seria e integral, tanto social como jurídica.

PALABRAS CLAVE:

Violencia familiar, Prevención, Sanción, Criminalidad.

ABSTRACT

One of the most recent legislative measures as regard of family violence was the amendment of Article 57 of the Penal Code, which banned the application of suspended sentence and provides custodial sentence, in cases of aggressions against women or members of the family group, crime governed in article 122-B of the same normative body; therefore, in the present investigation the effectiveness produced by the recent measure to confront this social problem is analyzed.

Given the date where legislative change was made, December 29, 2017, and based on the number of reports from domestic violence that Public Prosecution Service of Piura reciped, from July 2017 to June 2018, concludes that it was not as successful as it had hoped, because the rates of domestic violence have increased considerably. For that reason, it should be specified that the pedagogical function attributed to the Penal Code to transmit messages prohibiting certain behaviors, such as violence against women and family groups, shouldn't be taken into account in order to achieve prevention of them. On the contrary, it must be borne in mind that it's not only a problem of criminality that can be resolved by penalizing conduct or by increasing or hardening sentences; that means, should be discarded that Penal law is an instrument able of ending a problem such as domestic violence, because the solution to it requires a series of formal and informal control instruments that allow a serious and integral answer, both social and legal.

KEYWORDS:

Family violence, Prevention, Sanction, Crime.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, uno de los problemas más importantes que enfrenta la sociedad peruana es la violencia impartida hacia la mujer y demás miembros del entorno familiar, ello se evidencia en los altos índices de violencia registrados a nivel nacional, lo que, aunado al interés y su difusión por parte de los medios de comunicación, ha dado origen a un intenso debate en torno a su tratamiento jurídico.

Frente a ello, el legislador nacional, con el fin de ofrecer una respuesta rápida y oportuna, se ha centrado en la dación de leyes que permitirían hacer frente a dicho problema social; sin embargo, dichas medidas no habrían resultado tan efectivas.

Respecto a lo antes mencionado, una de las más recientes medidas tomadas por el Congreso de la República, fue la promulgación de la Ley N° 30710, mediante la cual se modificó en el artículo 57° del Código Penal, ampliando la prohibición de la aplicación de la suspensión de la pena para casos de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, delito regulado en el artículo 122-B del mismo cuerpo normativo.

En tal sentido, en la presente investigación se analizó la efectividad producida por dicha variación legislativa, teniendo en cuenta el número de denuncias de violencia familiar que ingresaron al Ministerio Público de Piura, desde el mes de julio de 2017 hasta junio de 2018. Para ello, se desarrolló cuatro capítulos: I) Aspectos de la problemática, II) Marco teórico, III) Marco metodológico y IV) Probanza de la hipótesis.

En el Capítulo I, se aborda los aspectos de problemática, la cual comprende la descripción y formulación del problema, la justificación e importancia de la investigación; así como, los objetivos y delimitación de la misma.

El Capítulo II, referido al marco teórico, contiene los antecedentes que sirvieron de guía para la presente investigación, las bases teóricas, un glosario de términos, el marco referencial y además, las hipótesis formuladas.

El Capítulo III, está relacionado al diseño metodológico, enfoque, nivel, los métodos y procedimientos, así como las técnicas e instrumentos empleados durante la investigación.

Finalmente, el Capítulo IV está vinculado a la probanza de la hipótesis materia de la presente investigación.

CAPÍTULO I

ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

En los últimos años, el proceso de creación legislativa, se ha convertido en una administración de propuestas a corto plazo que busca en mayor medida la satisfacción primaria del clamor popular y la veneración del castigo como elemento nuclear en la política criminal dominante. En base a ello, es común que si la tasa de criminalidad aumenta, lo primero que se proponga como solución es la elevación de las penas, la innecesaria creación de nuevos tipos penales o el endurecimiento de las normas procesales concernientes a una determinada clase de delitos.

Al respecto, mediante Ley N° 30506 de fecha 30 de setiembre de 2016, el Congreso de la República delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo, el mismo que, ante la necesidad de contar con normas que contribuyan a fortalecer la lucha contra el feminicidio, violencia familiar y la violencia de género, aprobó el Decreto Legislativo N° 1323.

Dicha norma, publicada el 06 de enero de 2017, introdujo varias reformas al Código Penal. Una de ellas fue la incorporación del artículo 122-B al Código, tipificándose las agresiones en contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual. Además, dicha conducta se agrava si tales agresiones se realizan en contextos de violencia familiar, coacción, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder, confianza o cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agresor; o cualquier forma de discriminación.

Luego de la incorporación de dicho tipo penal, se cuestionó el hecho de que simboliza un ataque mínimo a la integridad, contra la mujer o contra algún miembro de la familia, y que por su escasa lesividad al bien jurídico protegido no debería ser criminalizado, debido a que las lesiones que se han criminalizado son lesiones levísimas, es decir, nivel de afectación menor al tipo penal de lesiones leves. En tal sentido, dicha conducta debería permanecer como se encontraba contemplada antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1323, es decir, debería ser tipificada como falta contra la persona.

Sin embargo, lo antes mencionado, no constituye el único cuestionamiento que se ha planteado hacia el Decreto Legislativo N° 1323, pues a ello se le une la gravedad de las penas con que debería ser sancionado. Recientemente, mediante Ley N° 30710 de fecha 28 diciembre de 2017, se modificó el último párrafo del artículo 57° del Código Penal, prohibiendo la aplicación de la pena suspendida y disponiendo que, aquellos que sean condenados por este tipo de delitos, se les debe aplicar necesariamente, pena privativa de libertad efectiva.

A partir de ello, resulta necesario plantearnos la siguiente interrogante: ¿La política de Estado de sancionar con pena privativa de libertad efectiva los delitos de violencia en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar es la solución para prevenir y erradicar dicho problema social?

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación resulta relevante en el sentido de que, es necesario conocer y evaluar las medidas que está tomando el Estado Peruano con el fin de tratar o combatir el tema de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ello es importante, dado que nuestra realidad es sumamente preocupante, pues los índices de violencia familiar se han incrementado de forma alarmante.

Una de las medidas más recientes fue la modificación del artículo 57° del Código Penal, con la cual se establecía que los delitos de Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar deben sancionarse con pena privativa de libertad efectiva. Siendo así, es importante tener en cuenta que el Derecho penal, como uno de los medios de control social, es el recurso extremo para reducir los conflictos sociales, así como mantener el orden y la seguridad; pues mediante la amenaza penal se busca que los integrantes de la comunidad se abstengan de cometer actos delictivos y así lograr el respeto del sistema normativa. Por ello, la intervención del derecho penal solo debe producirse si no se alcanza el objetivo mediante otros medios normativos menos drásticos.

Por ello, se realizará un análisis a fin de verificar si la criminalización de dicha conducta vulnera el principio de *ultima ratio* y el carácter fragmentario del derecho penal. Esto se hace necesario por la severidad de la pena con la que se sanciona dicha conducta, teniendo en cuenta que actualmente, se prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena.

En tal sentido, la presente investigación se realizará para evaluar la eficacia de las sanciones impuestas a los agresores de mujeres y miembros de la familia; y en base a ello, proponer modificatorias al proceso y legislación vigentes, con el objetivo de que el Estado pueda adoptar mecanismos legales y de protección más eficaces que contribuyan plenamente a cumplir con el objetivo de la Ley N° 30364, es decir, que se pueda prevenir, sancionar y erradicar de nuestra sociedad, la violencia ejercida contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Analizar si la política de Estado de sancionar con pena privativa de libertad efectiva los delitos de violencia en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar sería la solución para prevenir y erradicar dicho problema social.

1.3.2. Objetivo Específico

Determinar si sancionar con pena efectiva una agresión levísima producida entre miembros de una familia, resulta compatible con los principios político-criminales.

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Delimitación Espacial

La presente investigación se realizará teniendo en cuenta las denuncias de violencia en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar que ingresan al Ministerio Público de Piura.

1.4.2. Delimitación Temporal

Mediante Ley N° 30710, publicada el 29 de diciembre de 2017, el Congreso de la República modificó el último párrafo del artículo 57 del Código Penal, estableciendo que la suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable para las personas condenadas por el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar que artículo 122-B.

En tal sentido, teniendo en cuenta la fecha en que se realizó tal variación legislativa, resulta conveniente investigar el número de casos denunciados ante el Ministerio Público de Piura, desde julio de 2017 hasta junio de 2018, a fin de determinar si dicha ley, publicada el 29 de diciembre de 2017, ha resultado idónea para combatir y erradicar la violencia familiar en nuestro país.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

(ORNA, 2013) En su tesis titulada “*Factores determinantes de la violencia familiar y sus implicancias:* ”, con el objetivo de analizar el problema de la violencia familiar dentro de las relaciones familiares, y en base a los datos reportados por las denuncias ante el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la Policía Nacional y Ministerio Público, llegó a la conclusión de que los casos de violencia familiar van en aumento y que las víctimas son principalmente las mujeres, por la frecuencia de casos comparados con la frecuencia de violencia familiar contra los varones.

(VENTURA, 2016) En su investigación denominada “*El proceso de violencia familiar, como garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género en el segundo Juzgado de Familia de Huánuco, 2014*”, con el objetivo de determinar el nivel de eficacia de los procesos de violencia familiar para reivindicar a las víctimas y su contribución en la prevención y reducción de la incidencia de dicho problema social, llegó a la conclusión que el proceso vigente no es eficaz, debido a que no contiene mecanismos efectivos de protección para las víctimas, ni garantizan totalmente sus derechos. Además, el proceso vigente de violencia familiar, de cierta forma, contribuye a prevenir y reducir los índices de comisión de este delito.

(REYNA, 2017) En su tesis denominada “*Eficacia de la Ley N° 30364 en la disminución de la violencia contra la mujer en relación a la Ley N° 26260 en el Distrito de Nuevo Chimbote 2016*”, y con el objetivo de determinar la eficacia vigente, utilizando el método descriptivo y diseño no experimental, determinó cuan eficiente es la Ley N° 30364, y cuáles son las principales deficiencias en su aplicación, para luego plantear posibles soluciones que optimicen la aplicación, ya que la violencia contra la mujer es un problema social generalizado.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. Pena Efectiva

Antiguamente, la pena efectiva o pena privativa de la libertad durante el imperio incaico, se cumplía de forma desigual, por un lado, los nobles cumplían su pena en cárceles especiales y bajo un régimen un tanto flexible; mientras que las personas comunes, permanecían en lugares de extrema dureza, por ejemplo, en las cuevas llenas de animales.

Durante la Colonia, los españoles establecieron varios tipos de carcelería, las cuales dependían de las categorías sociales, jurisdicciones civiles y eclesiásticas existentes. En tal sentido, se construyeron los locales especiales que funcionaban como cárcel para nobles, para presos comunes, clérigos, y jurisdicción inquisitorial.

Durante la República, una medida política totalmente desacertada, fue la existencia de un local carcelario propio del medioevo, que albergó, en condiciones infrahumanas a un promedio de 1,000 reclusos. El 26 de julio de 1968, se clausuró definitivamente como lugar permanente de detención.

Posteriormente, con la entrada en vigencia del Código Penal de 1863, se estableció el régimen de prisiones, estableciendo que los condenados con pena privativa de libertad, serían internados en un local recientemente construido y de acuerdo a su reglamento. Finalmente, en 1924, se promulgó el Código Penal de 1924, en el cual se estableció que el Poder Ejecutivo, sería el encargado de la dirección técnica y de la inspección de todos los establecimientos penales. Con ello, se inició una etapa positiva en la ejecución penal.

La pena privativa de libertad implica que la persona que haya sido condenada por determinado delito, necesariamente debe permanecer encerrado en un establecimiento penitenciario. En tal sentido, el condenado pierde su libertad ambulatoria; es decir, de trasladarse de un lugar a otro. De acuerdo al artículo 29 del Código Penal¹ vigente el tiempo de duración es variable, ya que puede ser de dos días hasta la cadena perpetua.

La pena privativa de la libertad, debido a que está orientada a evitar la comisión del delito, opera como garantía institucional de libertades y la convivencia armónica a favor del bienestar de la sociedad general.

Respecto a su ejecución, es necesario durante el cumplimiento de la pena, el condenado desarrolle un plan de reinserción social, pues la prevención especial asigna a la pena la función reeducadora, resocializadora e integradora del delincuente a la comunidad. Por tanto, el Estado debe dar vital importancia al tratamiento penitenciario durante el tiempo que el condenado cumpla con la sanción impuesta.

En lo relacionado a la cadena perpetua, desde la perspectiva de la prevención especial negativa, va a tener como función alejar al delincuente de las personas, y así mantener a la sociedad libre de peligro, es decir, tendrá como objetivo principal el alejamiento del condenado para evitar la comisión de nuevos delitos.

¹ Artículo 29.- *“La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de treinta y cinco años”.*

2.2.2. Agresiones contra la mujer y grupo familiar

La violencia en el ámbito de las relaciones familiares es un problema reiterado y de antecedentes remotos; sin embargo, es bastante reciente el interés de la sociedad y del Estado peruano por proteger a las personas que son víctimas de violencia cotidiana. En tal sentido, es importante conocer los antecedentes normativos de este tema, tales como; los Tratados Internacionales, la Constitución Política del Perú, el Código Civil de 1984, la Ley N° 26260 y finalmente, la Ley N° 30364.

2.2.1.1. Tratados Internacionales vinculantes

Los derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución Política deben ser interpretados conforme a los tratados y convenios internacionales que versan sobre derechos humanos, ratificados por el Perú.

Al respecto, el Tribunal Constitucional refiere que, conforme al artículo 55 de la Constitución², los tratados sobre derechos humanos que sean ratificados por el Estado peruano, por pertenecer al ordenamiento jurídico, son derecho válido, eficaz y, en consecuencia inmediatamente aplicable al interior del Estado (Exp. N° 5854-2005-PA/TC, 2005).

En base a ello, es necesario conocer los tratados internacionales firmados y ratificados por el Perú, en materias que incumben a la protección de las víctimas de violencia familiar, dentro de los cuales tenemos:

A. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

También es conocida como CEDAW por sus siglas en inglés (...) entró en vigencia el 3 de setiembre de 1981 y que fuera aprobada por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa N° 23432 del 04 de junio de 1982, constituye el principal instrumento jurídico internacional de derechos humanos para las mujeres, de carácter vinculante, y el marco jurídico primario para las políticas estatales de erradicación de la discriminación por razón de sexo (BENDEZÚ, 2015).

Esta convención es un instrumento jurídico vinculante para los Estados que la ratifiquen, pues los obliga a adoptar las medidas de carácter legislativo, administrativo u otro, para hacer valer los derechos que la misma reconoce. Por ejemplo, en cuanto a las mujeres, impone la obligación de respetar y garantizar el ejercicio y goce de sus derechos humanos, sobre la base de igualdad con los varones.

En tal sentido, la obligación de respetar, exige que el Estado, a través de sus poderes y funcionarios, no violen los derechos reconocidos por la Convención; mientras que la obligación de garantizar, consisten en realizar las acciones necesarias para asegurar el goce y ejercicio de los derechos.

Además, mediante la CEDAW se intentó hacer frente a la discriminación por sexo en contra de las mujeres, precisando las obligaciones que se desprenden del reconocimiento de los derechos consagrados en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y de los principios reconocidos en la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer.

² Artículo 55.- “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”.

Al respecto, es necesario señalar que si bien la discriminación y violencia ya estaban prohibidas por el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la CEDAW precisó de manera exacta las acciones que debería tomar cada Estado para hacer respetar y para garantizar el derecho a la no discriminación.

B. Convención *Belem Do Pará* de 1994

En la década de los noventa, la Organización de Estados Americanos (OEA), empezó una política de prevención de la violencia contra la mujer, también conocida como Convención *Belem Do Pará*, la cual constituye la única Convención dirigida exclusivamente a la erradicación de la violencia contra la mujer, dando paso a un avance significativo en relación a la protección de los derechos humanos de las mujeres.

Esta Convención también es conocida como Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

Respecto a la violencia contra la mujer, la define como cualquier acción o conducta, basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. En base a ello, la Convención pretende señalar enfáticamente, que no es el espacio físico donde se produce la violencia, el que la define; sino las relaciones de poder que se produce y las relaciones interpersonales entre las víctimas y sus agresores.

Además, fue una de las primeras en proponer la creación de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia y su reivindicación dentro de la sociedad. En base a ello, en diversos países se elaboraron leyes con el fin de regular las variadas formas de violencia familiar.

La Convención Belem Do Pará establece de forma específica las obligaciones relacionadas a medidas jurídicas y pedagógicas, que tienen los Estados que forma parte de ella.

En cuanto a las medidas jurídicas establece la obligación de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer; actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; incluir en sus legislaciones normas penales, civiles, administrativas o de otra naturaleza que contribuyan a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para apercibir al agresor de abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer; establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido víctima de violencia; adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que resulten necesarias para hacer efectiva la Convención; entre otras.

Por otro lado, respecto a las medidas pedagógicas, la Convención establece el deber de dar a conocer el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y a que se respeten y garanticen sus derechos humanos. Además, diseñar programas de educación tanto formales como no formales, que sean aplicables a todo nivel del proceso educativo, con el propósito de disminuir perjuicios, costumbres y otras prácticas basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en los papeles estereotipados para el varón y la mujer que de cierta forma legitiman o exacerban la violencia contra la mujer. Asimismo, fomentar la educación y capacitación de los diversos actores del sistema judicial encargados de la aplicación de la ley de protección a favor de la mujer.

En ese sentido, este pacto constituye un logro trascendental y valioso, ya que representa una verdadera redefinición del derecho interamericano sobre derechos humanos para aplicarlo con una orientación concreta de género.

2.2.1.2. La Constitución Política del Perú

La Constitución Política como norma fundamental del ordenamiento jurídico peruano, reconoce los principios básicos que contribuyen a asegurar los derechos y deberes de las personas. Al respecto, se debe precisar que la dignidad humana, es el principio básico y el derecho fundamental sobre el cual rige nuestro ordenamiento jurídico.

En diversas ocasiones, los derechos fundamentales de una persona pueden ser vulnerados o transgredidos de forma cotidiana, con actos de violencia familiar. Dichos derechos, están expresamente reconocidos en el artículo 2.1 de la Constitución Política, el mismo que señala que toda persona tiene derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Además, el artículo 2.22 de la Constitución política reconoce el derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como el derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.

Asimismo, el artículo 2.24.h³ del mismo ordenamiento, señala enfáticamente que una persona no puede ser víctima de ciertas formas de violencia. Siendo así, se debe precisar que la Constitución ofrece a las víctimas de violencia familiar una protección de carácter genérica, pues no cuenta con un enunciado específico referido al derecho de toda persona de vivir sin violencia en el ámbito familiar, tal como ocurre con otras constituciones políticas de países latinoamericanos.

Pese a ello, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, se han promulgado leyes especiales dirigidas a atender a aquellas personas que son víctimas de violencia familiar, haciéndose efectivos los derechos fundamentales que reconoce la Constitución.

2.2.1.3. El Código Civil de 1984

El Código Civil de 1984 regula una de las consecuencias que podría generar la violencia familiar dentro del matrimonio. Es así que, el artículo 333.2⁴, establece que el cónyuge que sea víctima de violencia física y/o psicológica, puede solicitar el divorcio, dado que se estaría vulnerando su derecho fundamental a la salud, a la integridad física y/o psicológica y libre desarrollo dentro del ámbito familiar.

Al respecto, se debe señalar que dichas formas de violencia son actos intencionales, ya que constituyen una acción de fuerza que se ejerce en agravio del otro cónyuge, lo cual determina la imposibilidad de hacer una vida en común.

En este tipo de procesos, se considera que los medios de prueba idóneos son los certificados médicos y las pericias psicológicas; sin embargo, en muchas ocasiones se han presentado expedientes sobre violencia familiar que concluyen con sentencia estimatoria, instrumentalizándolos en pos de realizar un futuro proceso de divorcio, tenencia de menor, patria potestad, entre otros.

³ Artículo 2.24.h.- “Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes (...)”

⁴ Artículo 333.- “Son causales de separación de cuerpos: 2) La violencia física o psicológica, que el juez apreciara según las circunstancias (...)”

2.2.1.4. Ley N° 26260

Con la finalidad de combatir el problema de violencia familiar, en diciembre del año 1993, el Congreso de la República promulgó la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Hasta entonces, el tratamiento legal de este problema social, se limitaba formalmente a lo regulado en el Código Penal; es decir, en lo concerniente al delito de lesiones y a las faltas, aunque en la práctica se consideraba que era un problema privado en el que el Estado no debía intervenir.

Ello, fue producto de la suscripción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres “Convención *Belém Do Pará*”. Esta ley ha sido susceptible de múltiples modificaciones con la finalidad de proteger los derechos de las víctimas afectadas por la violencia familiar.

La Ley N° 26260 definía a la violencia familiar como cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión e inclusive la amenaza o coacción grave y/o reiterada, así como la violencia sexual que se produzca entre cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia; y uno de los convivientes o parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones de hecho.

Ley de Protección frente a la Violencia Familiar ha aportado a nuestro ordenamiento jurídico dos aspectos significativos respecto al problema de la violencia familiar. El primero de ellos, está referido a la necesidad de adoptar decisiones de política por parte del Estado y de la sociedad; mientras que el segundo está relacionado a la consagración de mecanismos de protección frente a este problema social, que sean complementarios y no excluyentes de las existentes sanciones penales.

Posteriormente, el legislador nacional emitió diversas leyes en materia de violencia familiar, como el Decreto Supremo N° 006-97-JUS del 25 de junio de 1997, por el cual se dictó el Texto único Ordenado de la Ley de Protección frente a la violencia familiar, la Ley N° 26788 del 15 de mayo de 1997 y la Ley N° 29282 del 25 de noviembre de 2008, que introdujeron modificaciones en el Código Penal, entre otras.

2.2.1.5. Ley N° 30364

El 23 de noviembre de 2015, se promulgó la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, derogando la desfasada Ley N° 26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar.

La finalidad que persigue esta ley es prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer por su condición de tal y contra los integrantes del grupo familiar, producida tanto en el ámbito público como en el privado. Además, se tiene especial consideración cuando la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad, por edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Esta ley, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado; y además de ello, dispone la

persecución, la sanción y la reeducación de los agresores sentenciados, con el propósito de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.

La Ley N° 26260 se limitaba a sancionar los actos considerados como violencia familiar, es decir, solo aquellos hechos que eran cometidos por personas que tenían vínculo de familiaridad con la víctima; entre ellos se tiene a los cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes, parientas colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar sin relación laboral o contractual o quienes hayan procreado hijos. Siendo así, nuestro país no contaba con una norma que regule y sancione la violencia contra la mujer por razones de género.

La N° 30364, por el contrario, subsana ese vacío y reconoce en su artículo 5 la definición de violencia contra las mujeres de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Contra la Mujer, Convención “Belém do Pará”. Ello quiere decir que reconoce que la violencia hacia las mujeres no se limita al ámbito doméstico, reconociendo que puede ocurrir también en el ámbito público.

Este cambio es positivo, dado que con la Ley N° 26260 había situaciones de violencia hacia las mujeres que no acarreaban ninguna respuesta por parte del Estado; es decir, si no se daban en el ámbito doméstico o no configuraban delitos regulado Código Penal o faltas tipificadas en otra ley especial.

Además, dicho cambio significa la adecuación del ordenamiento jurídico peruano a estándares internacionales en materia de derechos humanos que se había comprometido a cumplir varios años atrás.

2.2.3. Ministerio Público

El Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado y tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos; la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También vela por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación.

Como antecedente más remoto del Ministerio Público se tiene al funcionario que defendía la jurisdicción y los intereses de la Hacienda Real ante los Tribunales del Consejo de Indias. Su función fue establecida en 1542 al instalarse la Real Audiencia de Lima y después la del Cuzco.

La pertenencia de los miembros del Ministerio Público al aparato judicial se mantuvo durante la Época Republicana. Desde la instalación de la Alta Cámara de Justicia hasta la creación de la Corte Suprema en 1825, el Ministerio Público siempre estuvo al lado de los jueces. Los reglamentos de Organización de los Tribunales no lo mencionaban como un organismo.

En la Constitución de 1823, en el capítulo pertinente al Poder Judicial (artículos 95 al 137) no hay referencias con respecto al Ministerio Público. Posteriormente, la Constitución de 1826 solo reguló la existencia de los fiscales a nivel de la Corte Suprema.

En la Carta Magna de 1828 se precisó que la Corte Suprema estaba constituida por siete vocales y un Fiscal; en tanto que las Cortes Superiores debían tener también uno. Además, hizo mención a los Agentes Fiscales, deduciéndose que su competencia era a nivel de primera instancia. Seis años más tarde, la Constitución de 1834 hizo mención al Fiscal de la Corte Suprema y se establecieron los mismos requisitos para ser Vocal o Fiscal. Igual hizo referencia a los Fiscales de las Cortes Superiores y a los Agentes Fiscales.

En la Constitución de 1839, se reguló a los Fiscales de la Corte Suprema, de la Corte Superior y Agentes Fiscales a nivel de los Juzgados de Primer Instancia. No obstante, esta Carta Magna tampoco hizo una precisión sobre sus atribuciones.

La Convención Nacional de 1855 aprobó la Ley sobre Organización del Ministerio Público, cuyas funciones fueron resumidas por el historiador Jorge Basadre: "aparte de la supervigilancia del Poder Judicial y, en especial (se refería al Fiscal de la Nación) sobre los Fiscales de las Cortes y Agentes Fiscales, le correspondía dictaminar en los asuntos y casos que le competían según la Ley de ministros; cuidar que todo funcionario público cumpliera la Constitución y las leyes; dar parte al Congreso sobre las infracciones de cualquier funcionario de la República, inspeccionar las oficinas del Estado y todo establecimiento público o corporación legal sin excepción alguna, dando parte de los abusos y de las transgresiones de las normas legales y reglamentarias; cautelar que las elecciones populares se verificaran con plena libertad y en los tiempos designados". Aparte de ello, durante mucho tiempo, el Ministerio Público se mantuvo como defensor del Estado ante procesos judiciales.

Durante la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1940, el Sistema Judicial Penal se volvió burocrático, rígido y secreto, además de lento, ineficiente e injusto. Estos problemas no permitieron garantizar la libertad de las personas, el desarrollo económico, el bienestar común y la democracia en el país. Posteriormente, al llegar a la mitad de 1979, la historia del Ministerio Público cambió radicalmente. La Constitución Política del Perú de 1979, aprobada por la Asamblea Constituyente de 1978, le atribuyó personería propia, con independencia, autonomía, organización, composición, funciones, atribuciones y prohibiciones; conforme a los artículos 250 y 251 del Capítulo XI. Después la institución fue desarrollada en su Ley Orgánica, mediante el Decreto Legislativo 052 del 19 de marzo de 1981, la cual sigue vigente, aunque con las modificaciones propias de la Constitución Política de 1993 y de las disposiciones legales que dispusieron su reorganización desde el 18 de junio de 1996 hasta el 6 de noviembre de 2000, día en que se promulgó la Ley N° 27367 que desactivó la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público.

La Constitución Política del Estado, vigente desde el 31 de diciembre de 1993, reguló al Ministerio Público en sus artículos 158, 159 y 160; estableciendo que esta institución es el titular del ejercicio público de la acción penal, habiéndose derogado los artículos pertinentes del Código de Procedimientos Penales de 1940. El Nuevo Código Procesal Penal, vigente gradualmente desde 2006, mantiene este principio, a la vez que establece tres etapas del proceso penal, salidas alternativas, entre otras innovaciones.

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS (Poder Judicial del Perú, 2018)

- **Agravante:** Circunstancia que concurre en la persona que comete un delito, o en el delito mismo, y que incrementa la responsabilidad pena.
- **Fallo:** Consideración final del Juez en un proceso que se autoriza en la sentencia.
- **Falta:** Infracción sancionada con pena leve.
- **Foja:** Expresión judicial para referirse a la hoja debidamente numerada.
- **Hecho punible:** Conducta de una persona, que se verifica por medio de una acción u omisión, que produce un efecto dañoso, el que es calificado de antijurídico por el ordenamiento legal.
- **Igualdad:** Aplicación uniforme de las mismas leyes a todos los ciudadanos.
- **Inculpado:** Persona contra quién se ha formulado cargos o imputado la realización de un delito, quién pasará a la condición de acusado, si el Fiscal encuentra mérito para formular acusación.
- **Indicio:** Circunstancias o vestigios, que por asociación o inferencia nos conduce a hechos que guardan relación. Juicio basado en el principio de casualidad. Por lo general, se usa para conocer un hecho por medio de las circunstancias que lo rodean.
- **Infracción penal:** Tránsito, incumplimiento o violación de la Ley Penal. Pueden ser según el sistema peruano delitos, faltas o contravenciones.
- **Irretroactividad:** Principio del derecho que prohíbe la aplicación de una norma a hechos ocurridos antes de su vigencia.
- **Juez:** Persona investida de autoridad jurisdiccional, quién decide en un proceso la solución que se le debe dar al litigio planteado. Quién en representación de estado, resuelve los conflictos suscitados entre los particulares.
- **Juez de paz:** El Juez de Paz, esencialmente es Juez de conciliación. Consecuentemente está facultado para proponer alternativas de solución a las partes a fin de facilitar la conciliación, pero le está prohibido imponer un acuerdo.
- **Juzgado:** Dicese del tribunal donde despacha el juez. Genéricamente se habla de juzgado de menores, juzgado penal, etc. Oficina en que labora el juez.
- **Legítima defensa:** Circunstancia extrema por la cual una persona se ve obligada a defender su integridad ante una agresión ilegítima, que como reacción de defensa podría causar daño o la muerte del atacante.

- **Libertad provisional:** Para acogerse a esta situación la pena privativa de libertad a imponérsele en caso de sentencia que no sea mayor de 4 años, o que el inculpado esté sufriendo una detención mayor a las dos terceras partes de la pena solicitada por el Fiscal.

- **Medios de prueba:** Instrumentos legalmente previstos para demostrar aquello que un litigante pretende demostrar en apoyo de su derecho.

- **Norma:** La regla social o institucional que establece límites y prohibiciones al comportamiento humano.

- **Orden de comparecencia:** Ordenanza de la autoridad competente para que una persona se presente, conservando su libertad, con el fin de efectuar esclarecimiento, diligencias y trámites pendientes en un proceso judicial.

- **Orden de detención:** Mandato de la autoridad judicial que priva a una persona de su libertad y que deberá cumplirse de ser necesario con la fuerza pública en el acto.

- **Pena:** Sanción prevista por la ley para los delitos graves.

- **Presunción de inocencia:** Principio destinado a que en los procesos penales sea la acusación quien deba probar la responsabilidad penal del inculpado.

- **Principio de legalidad:** Norma que obliga a todos los poderes del estado a someterse a la ley.

- **Querrela:** Denominación dada al ejercicio de la acción penal cuando la ley dispone, por tratarse de delitos o faltas que no acarreen mayor gravedad, que sea el ofendido su único titular; se le llama, por ello, acción privada.

- **Reincidencia:** Circunstancia agravante en el Derecho penal, que consiste en la realización de un nuevo delito, dentro de cinco años después de dictada la sentencia, que la haya sufrido en todo o en parte.

- **Reparación civil:** Resarcimiento del bien o indemnización por quién produjo el daño delictivo, cuando el hecho afectó los intereses particulares de la víctima. Según el art. 93 del Código penal, la reparación civil comprende: a) La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y b) La indemnización de los daños y perjuicios. La reparación civil es solidaria si participaron varios culpables. Su cumplimiento no está limitado a la persona del infractor (es) sino que puede ser transmisible a sus herederos y terceros.

- **Resolución:** Dícese del decreto, auto, sentencia o providencia que expiden los jueces en el ejercicio de sus funciones.

- **Responsabilidad penal:** Capacidad de un ser humano de reconocer lo prohibido de su acción culpable, pudiendo a través de este entendimiento determinar los límites y efectos de esta voluntad.

- **Sanción:** Del verbo latino Sancire, que significa originalmente “Santificar” o “consagrar”. Antiguamente disposición drástica del emperador. Se usa para designar la función punitiva, para quién trasgrede una ley.

- **Sentencia:** Parte última de proceso judicial, por la cual el juez debe resolver con relevancia jurídica el conflicto de intereses, aplicando con criterio lógico el derecho que corresponde a cada caso concreto para la resolución de la controversia.

- **Sujeto activo:** Quien comete delito.

- **Sujeto pasivo:** Víctima o agraviado por un delito.

- **Violencia:** Uso de la fuerza física contra el sujeto para doblegar su voluntad y obtener de él un beneficio que no hubiese otorgado de otra forma.

2.4. MARCO REFERENCIAL

2.4.1. Derecho Penal

Todas las sociedades modernas, debidamente organizadas, deben garantizar a los ciudadanos, las condiciones necesarias para su desarrollo y desenvolvimiento personal, acorde a los derechos fundamentales del ser humano. La idoneidad de este medio, supone una legitimación del mismo de acuerdo al ordenamiento de cada estado.

El medio de control social, supone la creación de sistemas de control informales, eficaces y eficientes; como la familia, las instituciones educativas, religiosas, profesionales e incluso grupos políticos y económicos. Además, de ellos existen sistemas de control formal, como las ramas del Derecho, entre las cuales se encuentra el Derecho Penal.

El Derecho Penal es un medio de control social formalizado, liberado de la espontaneidad y de la subjetividad que caracterizan a otros sistemas de control. En tal sentido, como parte del derecho en general, es utilizado para controlar, orientar y planear la vida en común. Mediante él, se determinan y definen ciertos comportamientos, los cuales no deben ser realizados o, queridos o no, deben ser ejecutados.

Desde una perspectiva objetiva, el Derecho Penal está constituido por un conjunto de normas jurídicas de carácter general que establecen condiciones y principios de intervención punitiva del Estado, y además de carácter especial que establece las conductas prohibidas que serán sancionadas con una pena o controladas a través de una medida de seguridad. Por otro lado, desde un aspecto subjetivo, el Derecho Penal es la facultad del Estado para crear o aplicar determinadas sanciones a las personas que infringen el Derecho Penal Objetivo; es decir, a las normas jurídico penales.

(TORRES, 2011), define el Derecho Penal como el conjunto de normas referentes a los delitos, a las faltas, a sus penas y a otras medidas de seguridad. Su finalidad es la de prevenir y castigar los delitos y las faltas.

Entonces, el Derecho Penal se caracteriza por imponer sanciones cuando se realizan acciones graves que vulneren los bienes jurídicos protegidos por la sociedad. Su uso, se justifica dado que tiende a resolver los problemas graves que se producen dentro de la convivencia social, evitando la venganza privada, la justicia por mano propia y la vigencia de la antigua Ley del Tali3n.

En un primer momento, el Estado orienta respecto de los comportamientos que deben tener los individuos, motiv3ndolos a realizarlos en una forma determinada, de modo que se pueda lograr la aplicaci3n de ciertos esquemas de vida social. En caso de que su tarea de evitar la realizaci3n de los actos no deseados llegue a fracasar, interviene el funcionario judicial para imponer una sanci3n penal.

La actividad punitiva constituye uno de los dominios en que el Estado ejerce su poder, con el fin de establecer o conservar las condiciones necesarias para el normal y buen desenvolvimiento de la vida comunitaria. La orientaci3n que d3 a su actividad penal, est3 determinada por las opciones sociopol3ticas que haya adoptado en relaci3n a la organizaci3n de la comunidad, en general.

2.4.1.1. La Política Criminal

El Derecho Penal es considerado como uno de los elementos más importantes de lucha, con el que cuenta el Estado, para hacer frente a la criminalidad. Eso es lo que se conoce como política criminal, la cual valora la eficacia y garantías fundamentales de los medios que se utiliza para prevenir la comisión de delitos, con el fin de promover su mejoramiento.

Todo sistema tiene por objeto una determinada política criminal, y tarea de ésta, no sólo la descripción de la reacción social contra la delincuencia, sino también determinar los lineamientos que deberían seguirse a fin de lograr una mayor eficacia.

En tal sentido, se considera que la política criminal presenta dos aspectos: por un lado, como una disciplina o un método de observación de la reacción anti criminal, tal como es, efectivamente, practicada; mientras que por otro lado, es como un arte o estrategia de lucha contra la delincuencia; elaborada a partir de los datos y enseñanzas aportados por la observación objetiva.

La ponderación política del sistema penal tiene lugar tanto en plano legislativo, como en el plano judicial.

En cuanto al ámbito legislativo, la política criminal determina las conductas sociales que deben ser prevenidas mediante el Derecho Penal, con base en los criterios de merecimiento y necesidad de aplicar una pena, considerando las necesidades y valoraciones sociales.

Por otro lado, la política criminal puede determinar la reforma del Derecho Penal positivo vigente, ello a fin de mejorarlo y dotarlo de eficacia. Es necesario señalar que si bien esta labor implica tener conocimiento del sistema penal, no se trata de un trabajo exclusivo de los dogmáticos, sino fundamentalmente, de los políticos o legisladores.

La política criminal no solo influye al momento de crear o reformar leyes penales, sino que también interviene al momento en que las mismas son aplicadas por partes de los órganos jurisdiccionales. Por ende, se puede afirmar que existe una íntima relación entre la dogmática penal y la política criminal, por lo que dentro de los límites de las leyes penales que impone el principio de legalidad, las decisiones de los órganos jurisdiccionales deben optar por arribar a las soluciones político criminales más convenientes.

La política criminal es, en consecuencia, una parcela de la política jurídica del Estado, la que a su vez es parte de su política general. La programación y realización de una correcta y coherente lucha contra la delincuencia, depende del apoyo y fomento de los estudios tendientes a describir el sistema de reacción social y a determinar los lineamientos y los medios más eficaces. De esta manera, se evitará que la reacción sea espontánea o inorgánica, motivada únicamente por el afán de dar satisfacción a los movimientos de la opinión pública, originados por la comisión de ciertas infracciones; o destinada a satisfacer, mediante la multiplicación o agravación indiscriminada de la represión, a un público impresionado o temeroso ante la comisión frecuente de ciertos delitos.

De allí que una racional y coherente política criminal suponga un esfuerzo de sistematización y desactualización de las instituciones que luchan contra la delincuencia; instituciones que deben, estar integradas en un conjunto coordinado dentro del cual se complementan, en lugar de oponerse; y que deben ser adecuadas a las condiciones sociales.

2.4.1.2. Teoría de la pena

La pena es el principal medio de que dispone el Estado como reacción frente a la comisión de un delito, pues la misma se aplica como una forma de restricción de derechos de la persona responsable. Además de la pena, nuestro ordenamiento jurídico prevé regula las denominadas medidas de seguridad, las cuales están destinadas a paliar situaciones en las que el uso de las penas no resulte plausible. En tal sentido, el estado peruano, cuenta con un sistema de reacciones penales se integrado por dos clases de instrumentos; penas y medidas de seguridad.

El derecho penal moderno ha humanizado sus penas, pues con las sanciones actuales ya no se afecta la integridad corporal de la persona sentenciada, mediante torturas, azotes o mutilaciones. Ello debido a que ha reemplazando este tipo de penas, por la de privación de la libertad personal, para delitos graves y fórmulas alternativas de punición a la privación de la libertad, como multas u otras privativas de derechos, para delitos menores e incluso, para faltas. Siendo así, se puede afirmar que existe una reserva del uso legítimo de la violencia en los poderes públicos, ya que el Estado es el único que utiliza las penas como un medio de control social legítimo. Es un instrumento de control formalizado que debe ser aplicado a la persona en forma proporcional y legal.

En tal sentido, la pena se justifica por su necesidad, como un medio de represión indispensable para mantener las condiciones de vida fundamentales en la convivencia de personas en una comunidad. Por consiguiente, su uso no se justifica por una cuestión religiosa ni filosófica, sino por ser una necesidad.

Respecto al fundamento y fines de la pena no existe una posición uniforme, originando la llamada lucha de Escuelas, lo que durante un largo tiempo ha sido el punto de quiebre de discusiones y polémicas en el campo del Derecho Penal.

Sobre ello, se hace distinción entre las teorías absolutas de la pena y las teorías relativas de la pena. El criterio que se utiliza para distinguir las mismas, radica en que las teorías absolutas consideran la pena como un fin en sí misma; mientras que la teorías relativas la vinculan a necesidades de carácter social.

A. Las teorías absolutas de la pena

Las teorías absolutas sostienen que la pena posee la misión fundamental de realizar el valor de la Justicia, sin considerar determinados criterios de utilidad social.

Dentro de estas teorías sobresalen las denominadas teorías retributivas de la pena, las cuales consideran que la sanción penal es una retribución por una lesión culpable. La retribución tiene una configuración objetiva y otra subjetiva, la cual depende de la forma en que se haya sustentado.

Desde el aspecto subjetivo-idealista, Kant sostiene que la ley penal es un imperativo categórico que impone la razón del sujeto individual sin atender a consideraciones de carácter utilitarista. El carácter ideal de esta concepción de la finalidad de la pena se pone de manifiesto en el extendido ejemplo de la isla propuesta por el profesor de Konigsberg, en donde llega a afirmar que si la sociedad de una isla decide disolverse, debe ejecutarse hasta el último asesino que se encuentre en prisión (GARCÍA, 2012).

Lo fundamental de esta concepción es que considera que la pena debe ser impuesta por imperativos de la razón, pese a que su ejecución no sea necesaria para la convivencia en sociedad.

Desde la versión objetiva-idealista, la teoría de la retribución de Hegel, considera que ante la negación del delito, el Derecho debe ser reestablecido. Si bien la voluntad subjetiva del autor no podría afectar la objetividad del Derecho, la única forma de tratar al delincuente como ser racional es dándole a su voluntad una pretensión de validez general. Es decir, la imposición de la pena, al negar la voluntad subjetiva del delincuente, reafirma la racionalidad general del sistema jurídico.

Para (GARCÍA, 2012), no se trata de un restablecimiento empírico, sino de un restablecimiento de la racionalidad del Derecho. Buscar el fin de la pena en el efecto motivatorio sobre el individuo sería tratar al sujeto como a un perro al que se le levanta un palo para amenazarlo.

Actualmente, existe cierto consenso en la doctrina penal respecto al rechazo de las teorías o concepciones absolutas de la pena, pese a que en los últimos años han surgido propuestas dogmáticas inspiradas en las posiciones de Kant y Hegel.

Resulta necesario precisar que el rechazo a las teorías absolutas de la pena, no se fundamenta en el cuestionamiento realizado a una filosofía de corte idealista; sino que el motivo radica principalmente, en la opinión general de que la existencia del Derecho Penal depende de la existencia de la sociedad. En ese sentido, no se podría concebir al Derecho Penal desligado de su utilidad social.

El Tribunal Constitucional peruano, ha mostrado total rechazo a la existencia de una teoría absoluta de la pena, refiriendo carece de todo sustento científico y que constituye una negociación absoluta del principio-derecho a la dignidad humana, reconocida en la Constitución Política del Estado.

B. Las teorías relativas de la pena

Las teorías relativas consideran que es necesario que la pena cumpla una función social. Sin embargo, no existe consenso doctrinal en cuanto a la determinación de esa función social. Por un lado, se considera que las teorías relativas procuran fines de prevención; mientras que por otro lado, se consideran las teorías de reparación o reestabilización.

A diferencia de las teorías absolutas de la pena, las teorías absolutas, con su imposición buscan utilidades sociales (prevención general) o individuales (prevención especial). En tal sentido, el uso de la pena se justifica por su necesidad para evitar la comisión de nuevos delitos; por lo que debe solo imponerse cuando sea necesario para cumplir con dicho fin.

El objetivo de prevención, se puede conseguir, bien de forma positiva, fortaleciendo el sentimiento de fidelidad al Derecho de los ciudadanos (prevención general positiva), o reeducando al delincuente (prevención especial positiva); bien de una forma negativa, esto es, mediante la intimidación, dirigida al colectivo social para que sus miembros se abstengan de cometer hechos delictivos (prevención general negativa o clásica), o dirigida a los sujetos que ya han delinquido (prevención especial negativa). El fin es pues, el mismo, en las dos clases de prevención negativa; la única diferencia es que mientras que la prevención general actúa sobre la imaginación (haciendo presente al potencial delincuente el mal que supone la pena), la prevención especial actúa, en cambio, sobre quien ya la ha sufrido.

a. Las teorías de la prevención

Las teorías de la prevención sostienen que la función de la pena consiste en motivar al delincuente o a los ciudadanos en general a no lesionar o poner en peligro los bienes jurídicos protegidos por el Estado. Es decir, la pena no tiene que realizar la justicia en la tierra, sino proteger a la sociedad. La pena no constituye un fin en sí misma sino un medio de prevención.

El surgimiento de las teorías de prevención, se remonta a los inicios de la historia del derecho, donde Platón decía: *nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccet*; lo cual quiere decir que, ningún hombre prudente pena porque se ha pecado, sino para que no se peca. En tal sentido, a diferencia de la concepción de la pena retributiva, la teoría de la prevención, es teoría una relativa, dado que encuentra su fundamento y fin en la disuasión futura de una infracción penal.

La función del Derecho Penal de proteger bienes jurídicos, tiene lugar a través de una incidencia directa de la pena sobre el proceso interno de motivación de cada individuo. El efecto motivatorio de la pena puede estar direccionado a los ciudadanos en general o de forma particular, al delincuente. Es así que, teniendo en cuenta estas posibilidades, se considera la existencia de la prevención general y la prevención especial.

a.1) La prevención general

La teoría de la prevención general considera que la función motivatoria del Derecho Penal está dirigida a la totalidad de los integrantes de una sociedad. A su vez, esta teoría tiene dos variantes, las cuales se diferencian por la forma en que se da el proceso motivatorio: La prevención general negativa y la prevención general positiva.

- La teoría de la prevención general negativa considera a la pena como un mecanismo de intimidación, a través del cual los ciudadanos evitarían lesionar o vulnerar los bienes jurídicos protegidos por el Estado. Este proceso de intimidación puede identificarse en dos momentos del sistema penal: En la norma penal y en la ejecución penal.

En la norma penal, la pena debe ser un factor de inhibición psicológica para que los ciudadanos no cometan un hecho delictivo. En este sentido, la función de la amenaza supone la existencia de un vínculo psicológico entre el mensaje de la norma penal y los ciudadanos. Uno de los principales cuestionamientos realizados a esta concepción radica en la dificultad de sostener esa vinculación psicológica dado que gran parte de los ciudadanos desconoce las normas jurídico-penales.

En la ejecución penal también puede configurarse la prevención general negativa de la pena. Una muestra de esta finalidad fue el denominado “panóptico”, el cual era una especie de cárcel que permitía a los ciudadanos ver desde afuera la forma en que los sentenciados cumplían su condena en prisión. En los Estados Unidos aún puede verse la aplicación de esta finalidad preventiva general, cuando se produce ejecución pública de personas.

El principal cuestionamiento a esta concepción es la utilización de la persona a la que se llega con fines preventivos.

- La teoría de la prevención general positiva no utiliza la intimidación a través de la amenaza penal como forma de prevenir la comisión de ilícitos penales; sino que se basa en el fortalecimiento que produce la pena en la convicción de la población sobre la intangibilidad de los bienes jurídicos.

En tal sentido, la tarea del Derecho Penal consiste en proteger bienes jurídicos a través de la protección de valores ético-sociales. Por ello, se dice que esta concepción de la pena superaría el peligro de un terror penal latente en una visión preventivo general negativa, dado que la pena justa sería la necesaria para confirmar los valores éticos.

Uno de los principales cuestionamientos a esta teoría es que tendría cierto corte autoritario, que se configura al imponer a los ciudadanos determinados valores ético sociales de carácter elemental. Siendo así, el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, haría poco viable la aplicación de esta teoría.

a.2) La prevención especial

La teoría de la prevención especial parte de la idea del efecto motivatorio de la pena, dirigido de forma específica al delincuente. Por tanto, no se considera como una teoría de la norma penal, sino por el contrario, de una teoría de la ejecución de la pena.

Esta teoría se contrapone a la teoría de la retribución, dado que la pena no responde al mal del delito cometido, sino que evita que la persona responsable, cometa futuros delitos. Si bien la prevención especial parte de una función motivadora de la pena, la persecución de su objetivo principal puede desbordar, de forma justificada, esta particularidad de la pena.

(GARCÍA, 2012) Refiere que la pena debe procurar primeramente, intimidar al delincuente para que no vuelva a cometer hechos delictivos. Si es que la pena impuesta no produce tal efecto de intimidación, entonces ésta tendrá que asumir la labor de corregir al sujeto inintimidable. Si finalmente, dicho sujeto resulta también incorregible, no quedará otra solución que su inocuización, es decir, su eliminación como peligro futuro de realización de nuevos delitos.

En los últimos años, los estudios científicos relacionados al funcionamiento del cerebro están provocando cierto retorno hacia los postulados de la prevención especial. Al respecto, la neurociencia parte de la tesis de que en el momento en que una persona experimenta algo conscientemente, el cerebro ya ha hecho su trabajo, lo cual implica que las acciones escapan del control del individuo y dependen de factores causales.

En base a ello, algunos neurocientíficos proponen potenciar el tratamiento y la prevención especial, dado que estudios más detenidos sobre el funcionamiento del cerebro humano habrían de llevar a que la prevención especial y la idea de peligrosidad criminal vayan ocupando de forma progresiva, el papel que actualmente, desempeñan la prevención general y la concepción de una pena proporcional a la culpabilidad por el hecho cometido.

Si bien la teoría de la prevención especial resurge de la mano de la neurociencia, la doctrina penal mayoritaria coincide en que en el horizonte inmediato no se va a producir un cambio en la visión del Derecho Penal.

a.3) La teoría de la unión

La teoría de la unión busca corregir los excesos plateados por las teorías absolutas o por las teorías relativas, desarrollando una combinación entre la perspectiva retributiva con fines de prevención.

La también llamada teoría unificadora, cumple una función retributiva, preventivo-general y resocializadora.

El principal cuestionamiento a esta teoría está referido a que crea niveles excesivos de discrecionalidad, en la medida que tanto el legislador como el juez podrían recurrir a cualquier teoría de la pena en función de la decisión que quisieran tomar. Un ejemplo de esta discrecionalidad sería que si un juez desea imponer una pena severa, recurriría a la prevención general negativa; mientras que si desea sustentar la falta de necesidad de pena, podría considerar el fin de resocialización del reo.

Teniendo en cuenta la arbitrariedad a la que podría llegarse con la aplicación de teoría de la unión, se ha desarrollado la llamada teoría dialéctica de la unión, la cual trata de explicar la función de cumple la pena en cada momento de su existencia.

En el momento de la norma penal, la pena cumple una función de prevención general, informada por los principios de exclusiva protección de bienes jurídicos y subsidiariedad.

En la imposición judicial de la pena, los fines preventivos estarían limitados por la culpabilidad del autor (retribución).

En la ejecución penal, adquieren preponderancia los fines de resocialización.

b. La función de reestabilización de la pena

La reestabilización de las expectativas normativas esenciales se lleva a cabo mediante la pena, la cual niega comunicativamente, la conducta defraudatoria, con el que se pone de manifiesto que la conducta del infractor no se corresponde con las expectativas normativas vigentes y que éstas siguen siendo el modelo de orientación social (GARCÍA, 2012). Siendo así, la función de la pena no tendría una incidencia sobre la persona, sino sobre el sistema social. Por tanto, la pena debe aplicarse para lograr mantener la identidad normativa de la sociedad.

Uno de los cuestionamientos a esta concepción es que deja de lado la naturaleza de la pena como un mal, de tal forma que es posible llegar a una pena que reestablezca la vigencia de una norma, sin que sea necesario llevar un mal aparejado para el autor. En ese sentido, existe la posibilidad de que la norma pueda restablecerse con la declaración del carácter incorrecto de determinado comportamiento, sin que sea necesario que al autor se le aplique un mal adicional, como por ejemplo, la privación de su libertad.

Otra de las críticas a la consideración de la pena como comunicación, es que se ha objetado centrar la función de la pena en la vigencia de la norma, independientemente de que si ésta resulta legítima o no. Teniendo en cuenta esta perspectiva, la pena cumpliría una función idéntica tanto en un Estado de Derecho como en un estado totalitario.

2.4.1.3. El *Ius Puniendi* del Estado

El *Ius Puniendi* es la facultad que tiene el Estado para crear o aplicar determinadas sanciones a las personas que infringen el Derecho Penal Objetivo, es decir, las normas jurídico penales.

El fundamento del *Ius Puniendi* del Estado, dependerá de la función que se asigne a la pena. La determinación de tal fundamento, requiere de la presencia del Derecho Penal en la sociedad actual. En ese sentido, si el Derecho Penal no fuera necesario socialmente, no habría forma de fundamentarlo materialmente.

Las tesis mayoritarias sostiene la necesidad del Derecho Penal; sin embargo, la discrepancia empieza al momento de determinar cuál es la función social del mismo. Al respecto, existen dos posiciones; la primera de ellas es la corriente mayoritaria y sostiene que el Derecho Penal debe proteger bienes jurídicos. Por otro lado, la corriente minoritaria plantea que el Derecho Penal cumple la labor de mantener vigente las expectativas normativas defraudadas por hechos reprobados socialmente.

En tal sentido, la corriente mayoritaria considera que el fundamento del *Ius Puniendi* reside en que es una manera de proteger bienes jurídicos; mientras que para los segundos consideran que no se trata de proteger bienes jurídicos como objetos valorados positivamente; sino de permitir la orientación social mediante el mantenimiento de la expectativa normativa defraudada por la realización de un determinado delito.

La asignación exclusiva de esta potestad al Estado, se fundamenta en que debe ser un tercero, ajeno al conflicto, quien decida respecto a la forma de resolver el mismo. Además de ello, se fundamenta en que los intereses afectados por la comisión de determinado delito, son de carácter público, y precisamente es el Estado el encargado de protegerlos.

(Exp. N°00033-2007-PI/TC, 2009) La persecución y sanción de conductas delictivas, en un Estado Social y Democrático de Derecho implica el diseño general de las políticas criminales las que no se agotan con la descripción típica de estos ilícitos sino también, entre otros, con la ejecución de la pena. Así, el *Ius Puniendi* del Estado funciona con sus limitaciones dentro de un marco penal de la Constitución, bajo los estándares internacionales referidos a la protección de derechos fundamentales y en estricta observancia de los fines de la pena. En este sentido, nuestro ordenamiento Constitucional y las obligaciones internacionales será el punto de inicio para poder establecer los fines que el régimen penitenciario se ha propuesto lograr y los objetivos que en ella se ha trazado en la Constitución, así como cumplir con los deberes y obligaciones asumidas por el Estado.

En las sociedades modernas, la potestad de castigar determinadas conductas, le corresponde al Estado, el mismo que de tal forma confirma su soberanía. Para ello, debe tener en cuenta los límites que establece su propia Constitución, así como la dignidad del ciudadano y la norma penal que legaliza y condiciona el castigo, dado que el Estado sólo puede imponer sanciones en base a las regulaciones que el legislador haya promulgado sobre delitos y faltas.

Respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, se debe mencionar que el *Ius Puniendi* del Estado, no sólo se encuentra limitado por la Constitución, los Pactos y Tratados Internacionales sobre Derecho Fundamentales; sino también por principios específicos, que serán detallados más adelante.

2.4.1.4. Los límites al *Ius Puniendi* del Estado

La potestad sancionadora que tiene el Estado, no puede ni debe ser una facultad ilimitada, que convierta al Estado en un ente onnipotente, todopoderoso o que le permita excesos en perjuicio del bienestar común y la convivencia armónica de la sociedad. Por el contrario, el uso adecuado de dicha facultad es lo que le permite conseguir y mantener el orden social.

En ciertas ocasiones, el ejercicio de la actividad punitiva por parte del Estado, comporta una grave afectación de derechos fundamentales de la persona. Debido a la naturaleza de la intervención penal, siempre ha existido la preocupación de establecer límites al poder estatal. Este esfuerzo se ha orientado a la búsqueda de la justificación de la pena, y a la determinación de un criterio suficientemente claro que permita determinar las acciones que deben ser prohibidas, para la fijación de las condiciones cuya preexistencia permita la imposición de la sanción; y la especificación de los casos en que la actividad punitiva es oportuna, necesaria y positiva.

El sistema penal debe considerar un conjunto de principios o garantías que establezcan límites a la potestad sancionadora del Estado. A estos límites se les conoce como principios político-criminales, dado que condicionan el uso del Derecho Penal para afrontar las conductas no aceptadas socialmente.

El origen de los principios político-criminales se remonta a la época en que conformó el Derecho penal liberal, por ende, resulta comprensible que estos principios garantistas respondan primordialmente, a una lógica individualista.

Además, la situación histórico-política que imperaba en esa época desempeñó un rol determinante en su configuración; pues se trataba de una época en la que aún se vivían los estragos de los abusos cometidos por los Estados absolutistas.

Por tal razón, las garantías penales se orientaron a evitar los excesos en el ejercicio del poder punitivo proveniente de aquellos que ostentaban el poder.

Resulta necesario precisar que el contexto político-social actual es muy distinto. Y si bien ahora, existe la posibilidad de que el *Ius Puniendi* se utilice de forma inadecuada, favoreciendo intereses particulares, la situación social tampoco es la misma.

Actualmente, se cuenta con gobiernos elegidos de forma democrática, los cuales gobiernan durante un periodo determinado, utilizando sistemas de control mutuo de poder e incluso en algunos casos, se emplea controles políticos por parte de los propios gobernados. En tal sentido, el hecho de mantener las garantías penales que se emplearon para los Estados absolutistas, generaría un estancamiento del sistema jurídico y a la vez, un alejamiento de la realidad. Siendo así, la determinación de las garantías penales y su contenido debe obedecer a la constitución social actual, a sus particularidades y requerimientos.

En el contexto actual, la justificación de los principios político-criminales, se encuentra tanto en una perspectiva preventiva como en una reestabilizadora del Derecho Penal. La primera de ellas, postula que la pena debe ser eficaz para prevenir los delitos y además, debe estar orientada a las garantías jurídico-penales.

Por otro lado, desde una perspectiva reestabilizadora las garantías penales funcionan atendiendo a la prestación social asignada al Derecho Penal. Por ende, no resulta concebible que la pena, cumpla su función si en el procedimiento de reestabilización no se observan los principios que aseguran que la pena desarrolle un efecto comunicativo válido en la sociedad actual.

A. Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos

En base al principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, el Derecho Penal puede intervenir únicamente para proteger bienes jurídicos merecedores de dicha protección, razón por la cual esta rama del Derecho no podría intervenir en situaciones relacionados con la moral o simples cuestiones de orden social.

Ahora, a fin de establecer el alcance político-criminal de este principio, resulta necesario determinar aquello que se debe considerar como un bien jurídico merecedor de protección penal.

a. El bien jurídico: Concepto y función

La doctrina mayoritaria define al bien jurídico como el fundamento que justifica la intervención del Derecho Penal. Siendo así, en caso de no contar con la protección de un bien jurídico, no existiría forma de sustentar la imposición de una sanción penal frente determinada conducta que vulnere o amenace con lesionar el mismo.

Por tanto, se puede afirmar que el bien jurídico, alcanza dicho carácter con la vigencia de una norma que lo contenga dentro de su ámbito de protección; por consiguiente, si la norma caduca o se deroga, perdería el carácter de "jurídico".

Por otro lado, se debe precisar que el concepto de bien jurídico cumple una función instrumental, dado que en base al mismo, se ha clasificado los diversos delitos existentes. Por otro lado, se considera que el bien jurídico cumple una función interpretativa, pues permite interpretar los diversos preceptos a la luz y desde el prisma del bien jurídico que vienen a tutelar. En tal sentido, es de vital importancia llegar a identificar cuál es el bien protegido en cada delito; para ello, resultaría inidóneo afirmar que es aquel que la ley dice se protege (así, por ejemplo, en los delitos contra la Administración Pública, el bien jurídico protegido es la Administración Pública), porque se trata de una tautología.

Asimismo, se considera que el bien jurídico cumple una función político-criminal, dado que sirve para limitar la acción del legislador al momento de definir las conductas que deben considerarse como delitos. En base a ello, se afirma que un Derecho Penal garantista debe establecer límites y barreras al uso desmedido del *Ius Puniendi*, en cuanto no sometido al *Ius Poenale*. Por tanto, el bien jurídico establece un límite en la medida que no es posible crear legislativamente delitos carentes de bien jurídico, en cuanto no pueden elevarse a la categoría de delito aquellas conductas que atentan solo contra intereses políticos, ideologías, y no contra realidades valoradas socialmente.

b. El principio de lesividad y delitos de peligro abstracto

Los delitos de peligro se oponen a los denominados delitos de lesión, constituyendo un elemento de distinción la relación de lesividad, vulneración o afectación que los vincula con el bien jurídico cuya protección justifica o sustenta la punición. En base a dicha postura, han sido concebidos como delitos cuyo centro se origina en la generación de una condición que hace peligrar al bien jurídico. Así se evidencia en los llamados delitos de peligro concreto. Sin embargo, en diversas ocasiones, dicha consecuencia (el riesgo) pasa a ser presumida por el legislador, ya sea por dificultades referidas a la acreditación de un vínculo de imputación entre éste y la conducta a inculpar o por concurrir en determinados comportamientos una alta

probabilidad estadística de generar dichos riesgos, dando con ello lugar a los tradicionalmente llamados delitos de peligro abstracto.

En tan sentido, se considera que los delitos de peligro abstracto sancionan comportamientos generalmente peligrosos sin requerir que se haya puesto en peligro o lesionado un bien jurídico protegido.

Según (GARCÍA, 2012), en la medida que estos comportamientos no lesionan o ponen en peligro el sustrato de un bien jurídico, un sector crítico de la doctrina considera que el concepto de peligro abstracto no es más que una invención del legislador para solucionar simbólicamente, y no de manera efectiva, los problemas de la criminalidad.

B. La *última ratio* o mínima intervención del Derecho Penal

El principio de intervención mínima del Derecho Penal o de *ultima ratio*, tiene doble acepción: por un lado, implica que las sanciones penales se limitarán a ocasiones indispensable, en beneficio de otras sanciones o incluso de la tolerancia de los ilícitos más leves; y por otro lado, implica que solo debe emplearse en aquellos casos donde no haya más remedio, es decir, tras el fracaso de cualquier otro modo de protección social.

(GARCÍA, 2012) Esta secundariedad del Derecho Penal se expresa concretamente en los principios de subsidiariedad y fragmentariedad que orientan la labor de incriminación que lleva a cabo el legislador penal: solo las lesiones más intolerables a los bienes jurídicos más importantes deben sancionarse penalmente.

a. El principio de subsidiariedad

El principio de subsidiariedad se manifiesta en dos formas: una cualitativa y otra cuantitativa. El aspecto cualitativo, se refiere a que el Derecho Penal sólo interviene cuando se lesiona o vulnera bienes jurídicos importantes. Por otro lado, el plano cuantitativo, establece que sólo se debe recurrir al Derecho Penal cuando han fallado los demás medios de control social.

En ese sentido, se considera que el Derecho Penal es el último recurso que debe emplear el Estado, y ello se debe, básicamente a la gravedad de las sanciones que podrían imponerse. Por ello, los ataques mínimos a los bienes jurídicos ameritan la intervención de otras ramas del derecho o de otras formas de control social.

b. El principio de fragmentariedad

El carácter fragmentario que se le atribuye al Derecho Penal, hace referencia a que sólo debe ser utilizado para prohibir las conductas más graves. Por lo cual, se dice que el derecho punitivo no castiga todas las conductas lesivas de bienes jurídicos sino sólo aquellas que revisten mayor entidad.

Con el objeto de determinar el carácter fragmentario del Derecho Penal, se debe tener en cuenta lo siguiente: el bien jurídico sólo protege aquellas lesiones que impliquen gravedad, se tipifica sólo parte de lo que otras ramas del ordenamiento jurídico estiman como antijurídico y no debe castigarse las acciones meramente inmorales.

C. El principio de legalidad

El contenido esencial del principio de legalidad, se resume en el aforismo latino *Nullum crimen, nulla poene sine lege*, lo cual significa que si no existe una ley previa que lo haya declarado punible, ninguna conducta puede ser calificada como delito y por ende merecer una sanción penal. Asimismo, su contenido se resume en las exigencias de ley previa (*lex praevia*) por el cual se prohíbe la retroactividad de la ley penal, ley estricta (*lex stricta*) se prohíbe la analogía, ley escrita (*lex scripta*) se establece la reserva de la ley y se prohíbe el derecho consuetudinario y Ley cierta (*lex certa*) se determina la taxatividad de la ley penal y se prohíbe la expedición de normas penales indeterminadas.

El principio de legalidad tuvo su origen en la época de la Ilustración y fue acogido por César Beccaria en 1764 cuando publicó su libro. En su libro hizo mucho énfasis al fundamento democrático de este principio, que actualmente es seriamente cuestionado. Además, César Beccaria refiere que solamente las leyes pueden establecer las penas de los delitos, y esta función debe residir en el órgano legislador, el cual representa a toda la población unida por el denominado contrato social. Por ende, ningún magistrado podría, de forma individual, decretar penas contra otro individuo de la misma sociedad.

Este pensamiento que, además, fue el de toda la filosofía penal conocida como la Ilustración, establecía claramente su preocupación por definir de forma previa los delitos y las penas en una sociedad, pero sobretodo su preocupación por sustentar y justificar el fundamento democrático de la ley penal de quiénes son los que crearían los delitos y las penas, cómo se realizaría; es decir, cuáles son los límites para dicha creación, la que estaría circunscrita dentro del derecho racional natural; y como se aplicarían, donde el rol del Juez sería muy exiguo.

a. Fundamento constitucional

El principio de legalidad está reconocido en dos normas de nuestro ordenamiento jurídico; tanto en Constitución Política⁵, como en el Código Penal⁶.

Siendo así, este principio garantiza la imparcialidad que debe tener el Estado, al momento de determinar de manera general y previa a la realización del delito, las características del hecho prohibido y la sanción penal que cabe aplicar contra el responsable. En tal sentido, se evita que la actividad punitiva esté bajo la influencia de subjetividades o de algún tipo de intereses políticos.

El principio de legalidad fue incorporado en el Derecho Penal liberal como un instrumento para enfrentar los abusos y actos arbitrarios de los Estados despóticos, en el sentido de que una previa determinación absoluta de las conductas prohibidas mediante la ley impedía abusos por parte de aquellos que ostentaban el poder. Este principio alcanzó un fundamento racional desde la perspectiva del Derecho Penal, en el sentido de un refuerzo necesario a su finalidad preventiva.

⁵ Artículo 2.- “Toda persona tiene derecho:

24. A la libertad y la seguridad personales. En consecuencia:

d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sanciona con pena no prevista en la ley”.

⁶ Artículo II.- Principio de Legalidad

“Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella”.

La comprensión del principio de legalidad como una garantía individual frente a la Administración de Justicia, ha llevado a algunos afirmar que se trata de la derivación de un derecho fundamental referido a la dignidad humana.

D. El principio de culpabilidad

El principio de culpabilidad se encuentra previsto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal⁷, exigiendo la responsabilidad del autor para poder imponerle una pena.

En el Derecho Penal contemporáneo, el principio de legalidad constituye el más importante axioma de los que derivan directamente de un Estado de Derecho, dado que su vulneración implica el desconocimiento de la esencia del concepto de persona. Por ende, su vigencia garantiza que una persona sólo sea considerada responsable por los actos que podía y debía evitar e impide que pueda ser sancionada por todas las consecuencias que se deriven de su acción.

En ese sentido, no es suficiente que el Estado determine la responsabilidad penal de una persona por la comisión de un delito sin mayor criterio que su propia amplia discrecionalidad, ya que de ser así, perdería legitimidad ante la sociedad y ante el infractor mismo. Por ende, resulta necesario determinar los presupuestos y condiciones, tanto fácticas como jurídicas, para que un delito pueda atribuirse a un autor.

Resulta necesario mencionar que los miembros de una sociedad deben tener conocimiento de cuáles son aquellos mecanismos de imputación, que siendo establecidos a partir de las normas jurídicas promulgadas por el Estado, van a permitir atribuir un hecho a una persona, ya sea imponiéndole una pena o medida de seguridad, o liberándola de ella. El principio de culpabilidad permite el juego limpio del Estado con el delincuente al determinarse con anterioridad los requisitos de cómo un delito va a ser atribuido a alguien.

El principio de culpabilidad representa el límite mínimo que el Estado debe respetar si es que pretende legitimar su intervención y la aplicación del instrumento estatal más poderoso: la pena. La sanción penal no puede simplemente justificarse por necesidades de defensa social o por criterios preventivo generales, que por sí suelen ser expansivos y avasallantes cuando se trata de defender bienes jurídicos, no se trata de un principio jurídico formal, trata de un principio con un contenido material que traza un límite infranqueable a la actividad punitiva del Estado.

a. Fundamento del principio de culpabilidad

El principio de culpabilidad tiene su fundamento esencial en la dignidad humana, cuyo respeto impide que una persona sea tratada como medio o instrumento para alcanzar fines distintos a los planteados por la misma, no faltan también quienes encuentran el fundamento del principio de culpabilidad en la consagración de un Estado de Derecho que lo inspira y legitima como deducción jurídico-constitucional del mismo; la cual estaría dividida en dos elementos: Que no haya pena sin culpabilidad y que no haya una pena que exceda la medida de la culpabilidad.

⁷ Art. VII.- Principio de responsabilidad penal

“La pena requiere responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”.

E. El principio de proporcionalidad de las penas

El principio de proporcionalidad se encuentra previsto en el artículo VIII del título Preliminar del Código Penal⁸, estableciendo que la pena no puede ser mayor a la responsabilidad por el hecho cometido y que la medida de seguridad deberá aplicarse teniendo en cuenta intereses públicos predominantes.

En tal sentido, este principio, conocido como Prohibición en Exceso, consiste en la búsqueda dentro del sistema penal de un equilibrio entre el Estado, la sociedad y el imputado. Además, constituye un principio básico respecto de toda intervención estatal gravosa, directamente a partir del principio del Estado de derecho.

La pena debe ser adecuada al daño ocasionado por el agente, según el grado de culpabilidad y al perjuicio socialmente ocasionado. Al respecto, el Tribunal Constitucional señala que este principio “impone al legislador que, al momento de establecer las penas, ellas obedezcan a una justa y adecuada proporción entre el delito cometido y la pena que se vaya a imponer (Exp. 010-2002-AI-TC, 2003).

Con ello, se complementa con el principio de culpabilidad ya que limita la pena a la proporcionalidad de la culpabilidad.

Este principio tiene un doble destinatario: el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Con relación al primero, se debe de establecer penas proporcionadas, en abstracto, a la gravedad del delito; y con relación al segundo, las penas que impongan los jueces al autor del delito han de ser proporcionadas a la concreta gravedad de éste. Al respecto, el Tribunal Constitucional establece que el principio de proporcionalidad tiene una especial connotación en el ámbito de la determinación de las penas, ya que opera de muy distintos modos, ya sea que se trate de la determinación legal, la determinación judicial o, en su caso, la determinación administrativa-penitenciaria de la pena.

La importancia de este principio consiste en que jerarquiza las lesiones y establece un grado de mínima coherencia entre las magnitudes de penas relacionadas a cada conflicto criminalizado, además que mantiene una adecuada relación con la finalidad preventiva. Además, impide que se apliquen penas superiores a dicha proporción, pero debe permitirse siempre al juez la posibilidad de reducir la pena por debajo del mínimo legal e incluso sustituir la pena privativa de libertad efectiva por otras más leves, o llegar a prescindir de la pena como tal.

Este principio tiene las siguientes acepciones: Principio de proporcionalidad abstracta y Principio de proporcionalidad absoluta. En cuanto a la primera acepción, sólo pueden ser objeto de sanción penal conductas que constituyen violaciones a derechos humanos.

Por otro lado, la segunda acepción, plantea que los costos sociales que origina la pena son elevados, entendiendo no en su contenido económico, sino en sus consecuencias sociales para el procesado.

En el sistema penal peruano, esta afirmación resulta de evidente constatación; por ejemplo, los efectos negativos de la pena influyen sobre las personas que las sufren, su familia,

⁸ Art. VIII.- Proporcionalidad de las sanciones

“La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente del delito. La medida de seguridad sólo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes”.

ambiente social y también sobre la sociedad. En otros casos, la intervención penal podría agravar conflictos u originar problemas mayores.

La observancia de estos aspectos permiten distinguir el principio de proporcionalidad de las penas en dos sentidos: por un lado, la necesidad de que la pena sea proporcionada al delito y por otro lado, la exigencia de que la medida de la proporcionalidad de la pena se fije en función a la importancia social del hecho. En base a ello, se sostiene que un Derecho penal democrático debe ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos a que se asignan, según el grado de la nocividad social del ataque al bien jurídico.

2.4.1.5. La pena

El término pena, proviene del latín “*poena*”, que significa castigo, tormento físico. Es la sanción jurídica aplicable a quien viola la norma jurídica prohibitiva. Es un “mal” que debe imponerse al culpable o responsable de la comisión de un delito. En base al principio de legalidad, toda persona debe ser castigada si el hecho está previsto en la ley como delito con anterioridad a la comisión del mismo.

La pena es un castigo consistente en la privación de un bien jurídico por la autoridad legalmente determinada a quien, tras un debido proceso, aparece como responsable de una infracción del Derecho y a causa de dicha infracción.

Cuando se hace referencia al aspecto teleológico de la pena, nos referimos a la finalidad de la misma; en tal sentido, tenemos que el Código Penal de 1991, en su artículo IX del Título Preliminar señala que la pena tiene fines de prevención, protección y resocialización. Esto se debe a la humanización de las penas, que a lo largo de los años ha evolucionado, desde la perspectiva que el delincuente ya no es visto como un individuo, culpable y sin derechos, que luego de haber quebrantado la ley debe pagar su culpa.

Por el contrario, las nuevas tendencias del Derecho Penal lo consideran como una persona a la cual pese haber cometido un acto antijurídico, debe tener las posibilidades necesarias de tomar conciencia de su acto, y en cuanto esto suceda, alcanzar una resocialización que le permita una vez cumplida su sanción integrarse a la sociedad como un elemento de bien.

Aquí hay que distinguir que, el sistema de penas preponderante, durante la vigencia del abrogado Código Penal de 1924, contemplaba una diversidad de sanciones, de las cuales la más privilegiada era la privación de la libertad (prisión, relegación, internamiento o penitenciaria). Sin embargo, el avance contemporáneo de la ciencia penal, influido con criterios garantistas, democráticos y humanitarios, determinaron un replanteamiento del sistema punitivo, que, privilegia las penas alternativas a la privación de la libertad.

Estos sustitutos constituyen un acierto útil, desde una perspectiva previsionista y resocializadora, donde existe –en teoría– un total respecto a los derechos fundamentales de la persona.

El sistema penal en el Perú, determina que los fines de la pena, deben de cumplirse en diferentes esferas (Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE) sin embargo por cuestiones de presupuesto, ineficacia, burocracias y demás defectos del sistema, esto no se cumple a cabalidad.

Es por ello que la prevención no debe quedar en un aspecto romántico, sino que debe existir una buena política criminal que incluya medidas legislativas acertadas con el objetivo de realizar un buen programa preventivo sostenido en el tiempo.

En conclusión, la finalidad de la pena en el sistema penal peruano, específicamente lo plasmado en el Código sustantivo de 1991, resulta la prevención, ya sea de manera general o especial conforme se ha mencionado.

A. Clases de pena

El Código Penal de 1924 adoptó un sistema dualista de penas y medidas de seguridad, lo cual para su época fue un notable avance que afiliaba nuestro sistema penal a los planteamientos político criminales de la doble vía. Como todos los códigos de ideología liberal de la época, el Código Maúrtua privilegió la pena privativa de libertad con cuatro modalidades: internamiento, penitenciaría, prisión y relegación.

Sin embargo, el legislador también renovó las características de otras sanciones tradicionales. Este fue el caso de la pena de multa, la cual se asimiló al sistema sueco del dagsbot (días-multa), dejando de lado la multa tasada muy frecuente en el Código Penal de 1863. Asimismo, el Código del 24 mantuvo la pena de inhabilitación con la misma configuración hispánica que tenía en su antecesor (Sobre las características de la pena de multa e inhabilitación en el Código Maúrtua).

El Código Penal de 1991, si bien ratificó dicha conformación de sanciones, incluyó también una cuarta modalidad punitiva a la que denominó penas restrictivas de la libertad, considerando en ella a las penas de expatriación de nacionales y de expulsión de extranjeros.

En tal sentido, conforme al artículo 28° del Código Penal, actualmente coexisten en nuestra legislación punitiva cuatro clases de penas y que en atención a su precedencia histórica e importancia político criminal podemos sistematizar del modo siguiente: pena privativa de libertad, las penas restrictivas de libertad, las penas limitativas de derechos y la pena multa.

a. La pena privativa de libertad

La pena privativa de libertad, como su nombre lo indica, afecta la libertad ambulatoria de una persona, impidiéndole trasladarse de un lugar a otro y determinando su ingreso y permanencia en un centro penitenciario.

Conforme al Código Penal, existen dos tipos de pena privativa de libertad: temporal y cadena perpetua. Respecto a la primera, tiene una duración que se extiende desde dos días hasta un máximo de 35 años. Por otro lado, tenemos la cadena perpetua o pena de carácter atemporal, la cual tiene una duración indeterminada.

El Código Penal reserva el uso de las penas privativas de libertad para un número importante de delitos, como por ejemplo, el homicidio (Artículo 106°), el hurto (Artículo 185°), el robo (Artículo I 88°), el terrorismo (Decreto Ley No. 25475) o el tráfico ilícito de drogas (Artículo 296°).

b. Las penas restrictivas de libertad

Las penas restrictivas de libertad, son aquellas que restringen los derechos de libre tránsito y permanencia en el territorio nacional de los condenados. Este tipo de pena se manifiesta en dos modalidades: por un lado, la pena de expatriación que es aplicable a los nacionales y por otro lado, la pena de expulsión del país que recae únicamente en los ciudadanos extranjeros. Lo particular de estas penas, es que no se aplican de manera inmediata, sino que se ejecutan después que el condenado haya cumplido la pena privativa de libertad que también le fue impuesta en la sentencia. Siendo así, se consideran penas conjuntas y de cumplimiento diferido.

De acuerdo al Código Penal peruano, son pocos los delitos que se sancionan con este tipo de pena. Entre ellos tenemos, el caso de los Atentados Contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria (Artículos 325° y 334° del Código Penal) y el Tráfico Ilícito de Drogas (Artículos 296° a 303° del Código Penal).

c. Las penas limitativas de derechos

Nuestro ordenamiento jurídico también ha previsto las denominadas penas limitativas de derechos, las cuales se encuentran reguladas desde el artículo 31° hasta el artículo 40° del Código Penal. Este tipo de penas básicamente, se caracterizan porque de cierta manera limitan el ejercicio de determinados derechos civiles, económicos e incluso políticos, además, restringen el disfrute de tiempo libre a cabalidad; entre ellas tenemos: prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres e inhabilitación.

Respecto a la primera de ellas, la prestación de servicios a la comunidad, es una pena que tiene escasos precedentes en el Perú, pues ni el Código Penal de 1863 ni el de 1924 la consideraron como sanción y únicamente se aplicaba, de forma sustitutiva en aquellos casos en que una persona no cumplía con la pena de multa. Corresponde a las llamadas formas de trabajo correccional en libertad, y puede ser aplicada de modo directo o también de modo sustitutivo. En este último caso, ella reemplazará a una pena privativa de libertad no superior a cuatro años, evitando así que el condenado sea recluido en un establecimiento penitenciario.

En segundo lugar, tenemos a la limitación de días libres y se define como la obligación impuesta al condenado de asistir los días sábados, domingos y feriados a un establecimiento especial, donde se desarrollarán actividades con fines educativos, psicológicos, de formación laboral e incluso cultural.

En cuanto a la duración, el condenado permanecerá en el establecimiento indicado por el juez, hasta por diez horas semanales. La extensión de la pena comprende entre diez y ciento cincuenta y seis jornadas de limitación semanales. Durante su estancia semanal, el condenado deberá participar en sesiones y dinámicas de carácter educacional o psicológico, y que resulten idóneos para lograr su rehabilitación personal.

Por último, la pena de inhabilitación puede ser impuesta como pena principal o accesoria. Ello quiere decir, que al condenado se le puede aplicar de forma exclusiva o complementariamente una pena de inhabilitación. En ese sentido, al sentenciado se aplicará una pena de inhabilitación accesoria si ha cometido una infracción de deber especial derivado de su posición funcional, familiar, profesional o laboral; o también, en caso haya cometido un delito culposo de tránsito, tal como lo establece el artículo 39° y 40° del Código Penal.

d. La pena de multa

La pena multa se encuentra regulada por el Código Penal, entre los artículos 41° y 44°, está referida a la sanción pecuniaria que afecta el patrimonio del condenado, dado que el juez le impone el pago de un monto de dinero a favor del Estado, por haber sido autor o partícipe de un delito. Respecto a este punto, es importante precisar que no debe confundirse la pena multa con la indemnización; dado que la primera de ellas es una pena de condición patrimonial, mientras que la segunda es una indemnización para la víctima del delito como lo es la reparación civil.

La multa se cuantifica a partir de la unidad de referencia abstracta que se conoce como día-multa, y además en función al volumen personal de rentas que percibe el condenado de forma diaria. En ese sentido, la cuantía que deberá pagarse como importe de la multa, se obtiene a través de un procedimiento especial, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y lo establecido para cada delito en particular.

Conforme al artículo 42° del Código Penal⁹, el mínimo de esta pena es de diez días-multa y el máximo de 365 días-multa, la cual deberá pagarse en un plazo de 10, contado a partir de la fecha en que se emite la sentencia. Sin embargo, la norma penal también considera la posibilidad de que el monto se abone de forma fraccionada a través de cuotas mensuales o también con un descuento directo sobre la remuneración del condenado.

Este tipo de penas, se aplica mayormente, a los delitos de escasa o mediana gravedad como la calumnia (Artículo 131°), la publicidad engañosa (Artículo 238°) o la receptación patrimonial (Artículo 194°).

B. Individualización judicial de la pena

La individualización judicial de la pena es aquel proceso que tiene como función, identificar y determinar la dimensión cualitativa y cuantitativa de las consecuencias jurídicas que corresponde aplicarle que ha cometido o participado en la comisión de un delito. Por tanto, se trata de un procedimiento técnico - valorativo de individualización de sanciones penales, es la determinación de las consecuencias jurídicas del hecho punible llevada a cabo por el juez conforme a su naturaleza, gravedad y forma de ejecución.

Durante el proceso técnico-operativo de individualización de la consecuencia jurídico-penal, la pena transita por diversos filtros que delimitan su ámbito de aplicación y ejecución, con la finalidad de salvaguardar los principios del Estado Constitucional de Derecho, establecidos en nuestra Constitución Política.

En ese sentido, la pena pasa por cuatro etapas para cumplir con su finalidad preventiva: etapa constitucional, etapa legal, etapa judicial y finalmente, la etapa administrativa; por ejemplo, en la etapa constitucional se encuentran los principios que fundamentan y limitan la imposición de una pena y en la etapa legal, el legislador hace entrega a los Magistrados de un catálogo de delitos con sus respectivas consecuencias jurídicas.

⁹ Artículo 42.- Extensión de la pena multa

“La pena multa se extenderá de un mínimo de diez días-multa a un máximo de trescientos sesenticinco días-multa, salvo disposición distinta de la ley”.

a. El juicio de idoneidad

Conforme al criterio de adecuación o idoneidad, una restricción o límite de un derecho fundamental es adecuada cuando ayuda a la consecución del fin que persigue: la protección de otro bien o derecho constitucionalmente garantizado. Si la restricción del derecho no sirve efectivamente para proteger otro bien o derecho constitucionalmente garantizado resultará inadecuada desproporcionada e inconstitucional.

Como primer paso se debe verificar si el fin puede ser considerado legítimo desde el punto de vista constitucional. Este primer elemento es un presupuesto del segundo; ello dado que si se ha establecido previamente, la finalidad que persigue la intervención legislativa, y si se ha constatado dicha finalidad no resulta ilegítima desde la perspectiva de la Constitución, podrá enjuiciarse si la medida adoptada por el Legislador resulta idónea para contribuir a su realización.

Durante este análisis de idoneidad, resulta indispensable establecer de forma previa, el fin que la ley pretende favorecer y corroborar que se trate de un fin constitucionalmente legítimo. Este análisis acerca de la legitimidad del fin legislativo ha sido designado en algunas sentencias del Tribunal Constitucional como juicio de razonabilidad de la intervención legislativa en los derechos fundamentales, cuyo objeto es verificar que la norma legal analizada no sea una decisión arbitraria, porque está fundamentada en alguna razón legítima.

Teniendo en cuenta que la ley penal interviene en el derecho a la libertad personal y otros derechos fundamentales, en el examen de idoneidad se debe verificar que la pena sea idónea para la consecución de un objetivo constitucionalmente legítimo. En base a dicho examen resulta necesario identificar un fin de relevancia constitucional en la medida legislativo penal que limita un derecho fundamental, ámbito en el que se manifiesta, según el Tribunal Constitucional peruano, el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y el principio de lesividad.

En tal sentido, será considerada constitucionalmente válida únicamente si tiene como fin la protección de bienes jurídicos de relevancia constitucional y tipifica conductas que realmente lesionen o pongan en peligro esos bienes jurídicos. Tanto la relevancia constitucional del bien jurídico como la dañosidad social justifican que nos encontremos ante un bien jurídico merecedor de protección penal. Por otro lado, se trata del análisis de una relación medio-fin, de constatar que la idoneidad de la medida tenga relación con el objetivo, es decir, que contribuya de algún modo con la protección de otro derecho o de otro bien jurídico relevante.

Según el Tribunal Constitucional, la idoneidad consiste en la relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado, a través de la intervención legislativa, y el fin propuesto por el legislador.

El Tribunal Constitucional considera que este análisis debe vincular los medios, la finalidad y el objetivo; ello quiere decir que debe tratarse de medidas que se vinculan con fines constitucionales y a su vez, debe tratarse del logro de acciones o estado de cosas tangibles (objetivos).

b. El juicio de necesidad

Conforme a este criterio, el límite establecido a un derecho fundamental únicamente, será constitucional si el fin que se persigue con él no se podrá lograr de otra forma que sea menos lesiva para el derecho fundamental limitado o que no le afecte en absoluto. Para que el principio de necesidad sea vulnerado resulta necesario que la medida alternativa sea igualmente eficaz para lograr el fin esperado.

En el ámbito legislativo, este juicio presupone la existencia mínima de un medio alternativo a la medida adoptada por el legislador. Ello, dado que, en caso de no existir estos medios alternativos no sería posible efectuar comparación alguna entre estos y la medida legislativa. Por tanto, el juicio de necesidad es definida como una comparación de medios, distinto al examen de idoneidad en donde se observa la relación entre el medio legislativo y su finalidad.

El juicio de necesidad implica que no sólo se haya comprobado la idoneidad de la medida cuya proporcionalidad se controla, sino también se haya determinado su fin inmediato. La idoneidad para alcanzar el fin inmediato constituye el criterio de selección de los medios alternativos. Por esta razón se considera al fin inmediato como un criterio constante en el análisis de necesidad.

Teniendo en cuenta los diversos medios alternativos es necesario analizar si los mismos cumplen con dos exigencias del juicio de necesidad:

- Análisis de la idoneidad equivalente o mayor de los medios alternativos: las palabras claves en este punto son idoneidad equivalente y fin inmediato. El primer punto se refiere a llevarse a cabo un análisis de los medios alternativos. En cuanto a la finalidad inmediata que debe ser obtenida al escoger la medida alternativa; esto es si el medio elegido contribuye en mayor medida a la obtención de la finalidad inmediata.

- Búsqueda de un medio más benigno con el derecho fundamental afectado: sobre este punto el autor señala que una medida adoptada por el legislador resulta innecesaria, si alguno de los medios alternativos reviste por lo menos una idoneidad equivalente para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto, además que interviene en un menor grado en el derecho fundamental afectado. De tal forma que el medio alternativo elegido no afecte negativamente el derecho fundamental.

Estas dos exigencias previamente a su adopción se plantean de manera hipotética, pues los medios no se han adoptado aún en la práctica; es un examen en el que no solo debe averiguarse si los medios alternativos habrían presentado y representarían una intervención en el derecho fundamental, sino también la intensidad de la misma.

El Código Penal ha adoptado una tendencia de alternatividad penal, dado que establece un conjunto de medidas alternativas a la pena privativa de libertad o a la imposición de otra clase de penas; entra ellas tenemos: suspensión de la ejecución de la pena, reserva del fallo condenatorio, la sustitución de penas y la conversión de penas.

- **La suspensión de la ejecución de la pena**

En aplicación de esta medida se suspende el cumplimiento de la condena por determinado período, durante el cual el condenado debe cumplir ciertas condiciones o normas de conductas, que si son cumplidas permiten declarar extinguida la responsabilidad criminal. Esta medida obedece a criterios del derecho humanitario que propicia darle al infractor una oportunidad de actuar en el futuro con respeto al orden jurídico.

Se conforme al artículo 58° del Código Penal, entre las reglas de conducta que puede fijar el juez tenemos: No frecuentar determinados lugares, no ausentarse del lugar de residencia sin autorización del Juez, comparecer personal y obligatoriamente al juzgado, para informar y justificar su actividad, reparar los daños ocasionados por el delito, salvo que demuestre que está imposibilitado de hacerlo, etc.

La suspensión de la ejecución de la pena obedece al principio de no necesidad de ejecución de la pena. En base a ello, se afirma que el uso de esta pena se justifica únicamente por la necesidad preventiva, esto es decir, la ejecución de una pena no es necesaria desde el punto de vista preventivo especial, cuando puede conseguirse también con su suspensión que el condenado no vuelva a delinquir y desde el punto de vista preventivo general, el efecto intimidatorio se consigue también con la simple amenaza de ejecución de la pena impuesta si el sujeto vuelve a delinquir durante el periodo de prueba.

En caso de incumplimiento de las reglas de conducta en el periodo de suspensión o el condenado ha sido sentenciado por otro delito, el juez podrá según los casos: Amonestar al infractor; Prorrogar el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado, prórroga que no podrá exceder de 03 años o revocar la suspensión de la pena.

- **La reserva del fallo condenatorio**

La reserva del fallo condenatorio es una alternativa a la pena privativa de libertad de corta duración. Tiene un origen convergente con la condena condicional, diferenciada de esta última en algunos matices, pero sostenidas ambas bajo un mismo horizonte: que es de orientar todo el sistema de penas a fines preventivos y de reservar la pena privativa de libertad para los injustos más graves, a partir de nuevos mecanismos punitivos más re socializadores y materialmente accesibles para el Estado. La reserva de fallo condenatorio viene a sustituir las cortas penas de privación de libertad, a fin de evitar sus efectos perniciosos, que en la práctica únicamente se condicen con el fin de prevención general de la pena., También es considerado como una dispensa judicial, que se adscribe en el marco de las facultades discrecionales del juzgador, que ante determinadas circunstancias dispone la reserva del fallo condenatorio, sometiendo al reo a una serie de reglas de conducta a fin de garantizar el programa re socializador, es decir, se orienta en exclusiva en el fin de prevención especial.

El artículo 62° del Código Penal, establece que la aplicación de la reserva del fallo condenatorio se sujeta a las facultades discrecionales del juzgador, quien valorará el caso concreto, analizando si éste se adecúa a las condiciones y requisitos establecidos en dicho articulado, en concordancia con el artículo 63°, que faculta al juez de abstenerse de dictar la parte resolutive de la sentencia. Es así como el juez se abstiene de pronunciar la pena, a pesar de haber encontrado judicialmente culpable al imputado, quien en virtud de determinadas características, merece según ley un tratamiento personal, de manera que la reserva de fallo se fundamenta en una menor desvaloración por el injusto y por el reproche mínimo personal, más la calificación delictiva queda subsistente, por lo que no importa su anulación antijurídica, que a

la parte resolutoria de la punición queda en reserva, más no la reparación civil, la cual mantiene su vigencia.

- **La sustitución de penas**

La sustitución de penas privativas de libertad en nuestro país, se encuentra previsto en el artículo 32° y 33° del Código Penal. Ella está vinculada con la operatividad de dos clases de penas limitativas de derechos: la prestación de servicios a la comunidad y la limitación de días libres. Su fuente legal extranjera la encontramos en el artículo 44° del Código Penal Brasileño de 1984.

Es un auténtico sustitutivo penal, ya que la medida que analizamos involucra, como efecto, la aplicación en lugar de la pena privativa de libertad, de otra pena de naturaleza distinta y no de detención del condenado.

La sustitución de penas es una alternativa que la ley deja al absoluto arbitrio judicial. Sólo se exige que la pena privativa de libertad sustituible no sea superior a cuatro años. En la medida, pues, en que el Juez considere en atención a la pena conminada, para el delito y a las circunstancias de su comisión que el sentenciado no merece pena por encima de dicho límite, él podrá aplicar la sustitución, consignando en la sentencia la extensión de la pena privativa de libertad que se sustituye.

- **La conversión de penas**

La política criminal moderna procura por todos los medios reemplazar la pena privativa de libertad por otra alternativa.

La conversión es reemplazar o sustituir una pena, generalmente privativa de libertad por otra equivalente, aunque evidentemente de menor intensidad, tales como multa, prestación de servicio comunitario o limitación de derechos.

En nuestro país, la conversión se aplica para hipótesis en que no procede la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, pudiendo el juez convertir la pena privativa de libertad no mayor de dos años en otra de multa, o la pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en otra de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres, a razón de un día de privativa de libertad por un día de multa, siete días de privación de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres, conforme a lo establecido en el artículo 52° del Código Penal peruano.

Ahora, si el condenado no cumple con la pena convertida injustificadamente y a pesar del apercibimiento persiste, se le revoca la conversión, descontando lo que corresponda para el cumplimiento de la pena que resta cumplir. También puede revocarse si el condenado comete nuevo delito doloso dentro del plazo en que se ejecuta la sentencia, que implique una pena mayor de tres años, en este caso, la conversión queda automáticamente revocada, según los postulados de los artículos 53° y 54° del Código Penal peruano.

c. El juicio de proporcionalidad

El juicio de proporcionalidad en sentido estricto nos dice que el límite a un derecho fundamental es constitucional si resulta coherente con el resultado de ponderar constitucionalmente los bienes y derechos constitucionales que han entrado en conflicto. A la hora de realizar dicha ponderación se tiene que tener en cuenta dos criterios: 1. Cuanto más importante es el grado de afectación del derecho fundamental limitado, tanto mayor ha de ser el beneficio que se obtenga para los bienes o derechos que a él se le oponen. 2. Cuanto más importante es la manifestación limitada del derecho fundamental, más importantes tienen que ser los bienes o derechos que a él se oponen. Esta ponderación que ha de realizarse únicamente sobre la base de criterios constitucionales, es una labor que debe desarrollarse caso por caso. No es posible ordenar en función de su importancia los distintos derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos.

2.4.2. Violencia contra la mujer y grupo familiar

2.4.2.1. Violencia contra la mujer

El término “violencia contra la mujer” surgió a partir de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, la cual fue aprobada el 20 de diciembre de 1993, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicha Declaración conceptualiza la violencia contra la mujer como acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, producida tanto en la vida pública como en la vida privada. Además, señala que la violencia impartida hacia las mujeres es una forma de violación de los derechos humanos y libertades fundamentales y una manifestación de la desigualdad histórica de las relaciones de poder entre el hombre y la mujer.

A lo largo del tiempo, con la intención de explicar el origen de la violencia contra la mujer, se hace referencia a que el patriarcado se ha respaldado en normas sociales y culturales, fomentando estereotipos y graves diferencias en la sociedad. En tal sentido, las situaciones de desigualdad y desventaja para la mujer surgen a partir de los patrones sociales y culturales que le asignan roles diferenciados por el hecho de pertenecer al sexo femenino, prevaleciendo las relaciones de poder del hombre, considerando la violencia y discriminación como naturales y justificadas.

Al respecto, es necesario mencionar que, en reiteradas oportunidades la ONU ha sostenido que si bien existen normas y prácticas culturales que empoderan a la mujer, también es usual que, para justificar la violencia hacia ella, se empleen costumbres, tradiciones y valores religiosos. En cuanto a normas culturales que ocasionan violencia contra la mujer, tenemos los crímenes cometidos en nombre del honor, las limitaciones a los derechos de las mujeres en cuanto al matrimonio y las creencias vinculadas con prácticas tradicionales nocivas, como por ejemplo; la mutilación genital femenina, el matrimonio de los niños y la preferencia por los hijos varones., entre otros.

La violencia contra la mujer es todo acto de violencia que se dirige contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres, siendo irrelevante el ámbito o la persona que la ejerce, pues solo importa la pertenencia a determinado sexo, sexo femenino.

2.4.2.2. Violencia contra el grupo familiar

La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Es decir, es todo acto cometido dentro de la familia por uno de sus miembros y que perjudica de forma grave la vida, el cuerpo, la integridad física y psicológica o la libertad de otro miembro de la familia.

El artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 30364 menciona expresamente, quiénes son los integrantes del grupo familiar: Cónyuges, Ex cónyuges, Convivientes, Ex convivientes, Quienes tengan hijas o hijos en común, Las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, Las y los descendientes por adopción, Las y los descendientes por afinidad (lo que se conoce en el lenguaje común como pariente político), Parientes colaterales hasta el

cuarto grado de consanguinidad, Parientes colaterales por adopción, Parientes colaterales hasta el segundo grado de afinidad, Quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la violencia.

2.4.2.3. Ciclo de la violencia familiar

Leonore Walker, reconocida psicóloga americana, realizó en 1979, una investigación a partir de los testimonios de mujeres maltratadas, para tratar de entender sus comportamientos y el por qué muchas de ellas terminan por perdonar las agresiones de su pareja. Luego de la investigación, llegó a la conclusión de que existen tres fases en torno a este fenómeno, a lo que denominó "ciclo de la violencia".

A. Primera fase: Aumento de la tensión

En esta primera fase, comienzan los pequeños desacuerdos y el maltrato psicológico basado en la idea de control. Las tensiones se manifiestan con insinuaciones, sarcasmo, menosprecios, ira contenida, entre otras. El agresor, por su lado, busca desestabilizar a la víctima, mientras que ella va adoptando una serie de medidas para calmar la situación y minimizar o negar el problema.

Esta etapa puede tener una duración indeterminada, desde días, semanas, meses o años. En ella ocurren incidentes menores como gritos o pequeñas peleas. Se acumula la tensión y aumenta la violencia verbal. La víctima interpreta estos incidentes que se producen en la primera fase como casos aislados que puede controlar, que no se volverán a repetir o que simplemente desaparecerán.

La víctima, según el comportamiento que la psicóloga observó, trata de calmar al agresor, se niega a sí misma que lo que está ocurriendo es una situación intolerable, busca excusas para justificarle, tiende a echar la culpa a otros factores ("ha tenido un mal día", "estaba borracho") y encubre al agresor frente a otras personas.

La actitud que se asocia con el agresor durante esta primera fase es cada vez más celosa y agresiva, se enfada por cosas insignificantes, está más sensible, alterable, tenso e irritado.

Una de las características que Walker destaca durante esta fase es la de auto culpabilización de la víctima: trata de "complacer" al agresor y cree que está en su mano hacer que no se repitan los incidentes, por este motivo él no se siente culpable de su comportamiento.

B. Segunda fase: Incidente agudo de violencia o explosión

Esta etapa se caracteriza por la pérdida total del control que se manifiesta con agresiones verbales, ataques físicos o sexuales por parte del agresor. Las consecuencias más lamentables para la víctima se producen en esta fase, quienes además, se muestran incapaces de reaccionar ante dichos ataques.

Walker define esta fase como la "descarga incontrolable de las tensiones que se han acumulado en la fase anterior". Esta vez la falta de control y la destructividad dominan la

situación. Se producen las agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales. La víctima primero experimenta una sensación de incredulidad que le lleva a paralizarse y a no actuar hasta pasadas unas 24 horas para denunciar o pedir ayuda. En esta fase es común que la víctima sufra tensión psicológica, insomnio, ansiedad, que permanezca aislada, impotente o que evite contar lo que ha ocurrido.

Esta teoría ha comprobado que los agresores tienen control sobre su comportamiento violento y que lo descargan sobre sus parejas de manera intencionada y selectiva

C. Tercera fase: Arrepentimiento y reconciliación

El agresor toma consciencia de lo que ha hecho y se esfuerza por mantener a su pareja a su lado, muestra arrepentimiento, pide perdón, llora y promete que no lo volverá a hacer. Esto hace que la víctima, a pesar de todo, renueve sus esperanzas en que su pareja cambie y tenga pensamientos como: “con el tiempo cambiará”, “yo sé que en el fondo él no es así”, “solo está estresado”, entre otras. Muchas veces, el agresor incluso trata de influir sobre familiares y amigos para que convenzan a su pareja de que lo perdone.

Esta etapa suele venir inmediatamente después de la segunda fase. Es un periodo caracterizado por una relativa calma, en la que el agresor se muestra cariñoso, amable, incluso arrepentido, llegando a pedir perdón y prometiendo que no volverá a suceder. La tercera fase se suele acortar o desaparecer según se sucede el ciclo a lo largo del tiempo

Este periodo dificulta en muchas ocasiones la posibilidad de que la víctima denuncie la situación, puesto que el comportamiento amable de su pareja le hace pensar que quizá haya sido solo un suceso aislado y que nunca más se va a volver a repetir la agresión. O puede que incluso sea durante esta etapa cuando la víctima retire la denuncia que había puesto en la etapa anterior.

Después de la fase de arrepentimiento se vuelve a la primera, la de acumulación de la tensión y después a su estallido, convirtiéndose así en un círculo, el ciclo, que define Walker, de la violencia. Esta teoría ayuda a explicar por qué muchas mujeres deciden no denunciar a sus parejas o por qué tardan tanto en hacerlo.

2.4.2.4. Ley N° 30364

La Ley N° 30364, es la norma publicada el 23 de noviembre de 2015, con el fin de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público o privado; especialmente, en casos de vulnerabilidad, por edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Además, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.

A. Sujetos de protección de la Ley

El artículo 7° de la Ley N° 30364, señala taxativamente quién o quiénes están bajo el amparo de la misma:

- Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor.
- Los miembros del grupo familiar: Entiéndase como tales, a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes; padrastros, madrastras; ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente convivan o no, al momento de producirse la violencia.

Al respecto, debe tenerse presente que la violencia familiar puede darse en parejas homosexuales. Si bien, el Código Civil no permite el matrimonio ni reconoce la convivencia entre éstos, a partir de la definición establecida por el artículo 2 de la Ley, se concluye que existe una cláusula abierta referida a todas aquellas personas que habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales.

B. Tipos de violencia

Actualmente, la violencia contra la mujer asume diversas manifestaciones e incluso, teniendo en cuenta los avances tecnológicos podemos mencionar el acecho hacia la misma, a través de redes sociales o por teléfono móvil. Frente a ello, resulta necesario que el Estado reconozca el carácter cambiante de la violencia contra la mujer y reaccione frente a las nuevas formas que surgen en el entorno social, económico, cultural y político.

Al respecto, la derogada Ley N° 26260, Ley de protección frente a la violencia familiar, regulaba la violencia física o psicológica, el maltrato sin lesión y la violencia sexual; sin embargo, la ley actual ratifica los tipos violencia más comunes y deja de lado el maltrato sin lesión, para incorporar la denominada violencia económica o patrimonial.

a. Violencia física

La violencia física es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud de una persona. En este caso se incluye el maltrato por negligencia, descuido o privación de las necesidades básicas, que hayan causado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, resultando irrelevante el tiempo que requiera su recuperación.

Entre los actos de violencia física más comunes, se puede mencionar los empujones, puñetazos, fajazos, jalones de cabello, bofetadas, heridas o golpes con cualquier objeto.

b. Violencia psicológica

La violencia emocional o psicológica La violencia psicológica es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos; es decir, puede afectar o alterar algunas funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo.

Este tipo de violencia se desarrolla a través de insultos, menosprecios, humillaciones, intimidación, etc. Asimismo, se manifiesta a través de la desvalorización, las conductas de restricción, las posturas físicas y gestos amenazadores y conductas de destrucción, entre otros (BENDEZÚ, 2015).

Respecto a ello, es necesario precisar que la desvalorización está relacionada a la crítica, la comparación constante sobre la imagen física o las características de personalidad, en la devaluación de las opiniones o preferencias de una persona; mientras que las conductas de restricción, están referidas al control de amistades, dinero, salidas de casa, forma de vestir, aislando a la persona. Las posturas físicas y gestos amenazadores, se manifiestan con la violencia verbal, al alzar el puño, al gritar, al amenazar con suicidarse o agredir físicamente. Y por último, las conductas de destrucción, se da sobre objetos de valor sentimental y económico, al golpear puertas o animales domésticos, etc.

c. Violencia sexual

Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.

d. Violencia económica o patrimonial

Es la acción o la omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de:

- La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
- La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;
- La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias;
- La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro del mismo lugar de trabajo.

C. Enfoques

(SILVA, 2018) los operadores, al aplicar la ley para la Prevención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, consideran los siguientes enfoques:

a. Enfoque de género

Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres.

Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

b. Enfoque de integralidad

Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario y estructural.

Por ello se hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles en los que las personas se desenvuelven y desde distintas disciplinas.

c. Enfoque de interculturalidad

Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se integran en la sociedad peruana, de modo que permita recuperar, desde los diversos contextos culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la otra persona.

Este enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la violencia u obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre personas de géneros diferentes.

d. Enfoque de derechos humanos

Reconoce que el objetivo principal de toda intervención debe ser la realización de los derechos humanos, identificando a los titulares de derechos y aquellos a lo que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades; identificando, asimismo, a los obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que les corresponden.

Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones.

e. Enfoque de intersectorialidad

Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión; opinión política o de otro tipo; origen nacional o social, patrimonio; estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva,

condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad; y, en su caso, incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres

f. Enfoque generacional

Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una conexión, pues en conjunto están abonando a una historia común y deben fortalecerse generacionalmente.

Presenta aportaciones a largo plazo considerando las distintas generaciones y colocando la importancia de construir corresponsabilidades entre estas.

2.4.2.5. Tipo penal de agresiones contra la mujer y grupo familiar

El delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, incorporado por el Decreto Legislativo N° 1323, se encuentra tipificado y sancionado en el artículo 122-B del Código Penal, el cual señala expresamente:

Artículo 122-B.- Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar

El que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme al artículo 36.

La pena será no menor de dos ni mayor de tres años, cuando en los supuestos del primer párrafo se presenten las siguientes agravantes:

- 1. Se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima.*
- 2. El hecho se comete con ensañamiento o alevosía.*
- 3. La víctima se encuentra en estado de gestación.*
- 4. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición.*

Este ilícito penal se configura cuando una persona causa daño en el cuerpo o en la salud de otra persona sea mujer o a cualquier integrante del grupo familiar, situación que se sancionará con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal. La condena de prisión efectiva será no menor de dos ni mayor de tres años, cuando en las presunciones del primer párrafo se presenten las agravantes que señala el artículo antes mencionado.

A. Bien jurídico tutelado

El bien jurídico protegido por este delito es la integridad física y la salud de la mujer o en su caso, de algún integrante o miembro del grupo familiar.

Durante mucho tiempo se consideró que el delito de lesiones buscaba proteger la integridad corporal, es decir solo se vio su aspecto físico y se dejó de lado su aspecto psíquico, no obstante el delito de lesiones tiene como bien jurídico protegido a la salud, la cual es definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar físico, mental y social. Por lo que en algunos casos no se podrá acreditar una lesión material, sino inmaterial, cuando ha de verse la afectación de la integridad psíquica del ofendido, lo importante es que exterioricen un real menoscabo. A partir de lo dicho se debe tener en cuenta que la salud es un factor muy importante en el desarrollo integral de la persona, lo cual repercute en la sociedad generando relaciones equitativas y armoniosas entre las personas, en tal contexto surge normativa para poder acreditar no solo las lesiones físicas sino también el daño psíquico, tal como en el año 2011 la Guía de Valoración del Daño Psíquico en víctimas adultas de Violencia Familiar, Sexual, Tortura y otras formas de violencia.

B. Tipicidad objetiva

El sujeto activo puede ser aquella persona que tenga una determinada relación con la víctima de la femina o los miembros del grupo familiar.

Asimismo, este tipo penal tiene como sujetos pasivos: A la mujer y a los integrantes del grupo familiar.

En cuanto a la violencia contra la mujer, la misma debe ser en su condición de tal, entendida ésta como la acción u omisión que se realiza en el contexto de violencia de género, como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad, a través de relaciones de dominio, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres.

Por otro lado, la violencia hacia los integrantes del grupo familiar, se entiende a la acción u omisión que se realiza en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar; entiéndase como tales, a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes; padrastros, madrastras; ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente convivan o no, al momento de producirse la violencia.

C. Conducta típica

Este tipo penal regula dos tipos de conducta: una relacionada a la agresión física, para lo cual se requiere que sea menor de diez días de asistencia o descanso; y la otra corresponde a la agresión psicológica con sus derivados como son afectación psicológica, cognitiva y conductual.

2.4.3. Violencia familiar en el Derecho Comparado

2.4.3.1. En Argentina

El 01 de abril de 1996, se promulgó la Ley N° 24.632, mediante la cual se aprobó la Convención *Belem Do Pará*, desarrollada en Brasil el 9 de junio de 1994. Los Estados partes presentes en dicha Convención, aprobaron medidas de sensibilización conforme al artículo 7°, Preceptos Rectores, que involucra a los tres poderes del Estado en el ámbito nacional o provincial, para la adopción de medidas orientadas al respeto irrestricto de los derechos fundamentales para la igualdad entre mujeres y varones.

En tal sentido, se propone garantizar la eliminación de la discriminación, desigualdades en las relaciones de poder sobre las mujeres; garantiza la adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad, deslegitimando la violencia contra las mujeres; garantizando a las víctimas asistencia integral y oportuna, garantizándoles el acceso gratuito, eficaz, a los servicios diversos creados para tal fin protector.

La Convención ratificada por Argentina, promueve medidas de sanción y reeducación para los violentos perpetradores. Entre otros aspectos resaltantes de la Convención, está el incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, en la tarea de Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer, garantizando además la confidencialidad e intimidad de las víctimas.

Posteriormente, con fecha 01 de abril de 2009, se promulgó la Ley 26.485, Ley para la protección integral, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Dicha ley, busca promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones, que se presenta en las actividades que realizan en su vida diaria, propendiendo a garantizar como objetivo una vida sin violencia para la mujer.

Para tal fin, la norma materia de análisis, en su artículo 2° inciso c) dispone crear condiciones para la sensibilización, prevención, sanción, erradicación de toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. Se propone desarrollar políticas públicas de carácter interinstitucional dirigidas a eliminar patrones socioculturales que promueven y sostienen esta desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. Se garantiza el acceso a la justicia, para aquellas que padecen de violencia. Además se les garantiza asistencia integral que comprende su participación en los programas destinados a mujeres y/o en los servicios especializados de violencia, creados para tal propósito en el ámbito nacional.

La legislación Argentina se propone crear condiciones óptimas para sensibilizar y prevenir sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. Sus planes y programas se orienta a garantizar el respeto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones, eliminando los patrones socioculturales que promuevan y sostengan la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.

2.4.3.2. En Chile

Con fecha 22 de setiembre de 2005, se promulgó la Ley N° 20.066, Ley de Violencia Intrafamiliar. En cuanto a la erradicación de la violencia de género, se plantea como uno de sus

objetivos la prevención, sanción a los perpetradores, así como la protección a su víctima, para garantizar su vida y la seguridad de su familia, entendido ello como un deber del Estado.

En la referida norma, si bien no existe referencia literal a medidas de sensibilización contra la violencia de género, el Estado chileno asume la capacitación de sus funcionarios encargados de la aplicación de la Ley, en el desarrollo de planes y programas, cuyos contenidos están dirigidos a modificar aquellas conductas que estimulan la violencia intrafamiliar, para erradicar la violencia de género.

El Servicio Nacional de la Mujer, conforme al artículo 4° de la Ley comentada, le asigna un rol protagónico en su implementación, expresamente no hace referencia a medidas de sensibilización contra la violencia de género, sin embargo se proponen políticas públicas al Presidente de la República. También se le encarga la formulación anual de un plan nacional de acción en la que recomienda medidas a tomar contra la violencia, impulsando, coordinando y Evaluando políticas gubernamentales para tal fin. Importante es la función asignada por Ley, para promover la contribución de medios de comunicación en la tarea de erradicar la violencia contra la mujer y fomentar el respeto a su dignidad.

Posteriormente, el 10 de marzo de 2010, se promulga la Ley 20.427, la cual modifica la Ley 20.066, e introduce importantes reformas para incorporar articulados de protección de los derechos del Adulto Mayor. Entre otras disposiciones, precisa que constituye riesgo inminente, cuando un adulto mayor, dueño o poseedor, con cualquier título, de un inmueble que ocupa y reside, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento en su interior por algunos de sus parientes; cónyuge o conviviente, pariente consanguíneo o por afinidad, en toda la línea recta o en el colateral hasta el tercer grado del ofensor.

De la misma manera con la finalidad de proteger al Adulto Mayor, se ha modificado el Código Penal, en su artículo 489, en consecuencia de ello los parientes descritos en el párrafo anterior no están exentos de responsabilidad criminal por los hurtos, defraudaciones o daños, cuando la víctima sea una persona mayor de sesenta años.

La Ley 20.066 de violencia intrafamiliar, en su Artículo 9° faculta al juez aplicar medidas accesorias contra los perpetradores que comprende la obligación del ofensor de abandonar el hogar que comparte con la víctima; así como la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, o cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente, incluso el lugar de trabajo de estudio. Se prohíbe al agresor el porte tenencia de armas de fuego.

La Ley contempla que el agresor debe asistir de manera obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar; para ello existen instituciones autorizadas para la ejecución de dichos programas. También la obligación del agresor de presentarse de manera regular ante la unidad policial que determine el juez.

En conclusión, la legislación de Chile no incorpora literalmente medidas de sensibilización contra violencia de género, sin embargo el Estado reconoce su deber de adoptar las medidas conducentes a garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los miembros de la familia; así como también orienta los planes y programas cuyos contenidos pretenden modificar las conductas que favorecen, estimulan o perpetúan la violencia intrafamiliar. La Ley de Chile se propone desarrollar planes de capacitación para los funcionarios públicos, políticas y programas de seguridad pública, favorecer iniciativas de la sociedad civil, así como dar

cumplimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

2.4.3.3. En Colombia

La Ley N° 1257 fue promulgada el 04 diciembre de 2008 y mediante ella dictaron normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reformó el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.

Esta ley establece que el Gobierno Nacional es el encargado de formular, aplicar, actualizar estrategias, planes y programas para la prevención y erradicación de toda forma de violencia contra la mujer. Se atenderá la formación para los servidores públicos que garanticen una correcta implementación de estas medidas. Se contempla la implementación de las recomendaciones en favor de las mujeres formuladas por los organismos internacionales, en materia de Derechos Humanos. También contempla desarrollar planes de prevención, detección y atención de situaciones de acoso, agresión sexual o cualquiera otra forma de violencia contra las mujeres.

Por otro lado, se dispone que los Departamentos y Municipios, incorporen en la agenda de los Consejos para la Política Social, el tema de violencia contra mujeres; y en sus planes de desarrollo municipal y departamental un capítulo de prevención y atención para las mujeres víctimas. Se establecen también importantes medidas de información a través del Ministerio de comunicaciones de Colombia; para ello se elaborará programas de difusión orientados a la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, para garantizar el respeto a su dignidad, y a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres sin discriminación. Se establecen medidas educativas a través del Ministerio de Educación, velando por la incorporación en su formación, de la cátedra de Derechos Humanos, que oriente el respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres, que contribuyan a sensibilizar, capacitar y entrenar a la comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes y padres de familia, en el tema de violencia contra las mujeres.

En el ámbito laboral, se contempla promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, se implementará mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial, así como las de desarrollar campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en los centros de trabajo

En el ámbito de la Salud, la Ley dispone elaborar o actualizar los protocolos y guías para la actuación de las instituciones de salud y de su personal ante la presencia de casos de violencia contra las mujeres.

De otro lado, se le asigna a la familia un rol preponderante, al atribuírsele la responsabilidad de promover los derechos de las mujeres en todas sus etapas vitales reconocidas y consagradas en la norma analizada; como también para la eliminación de todas las formas de violencia y desigualdad contra la mujer. Es importante destacar en la norma examinada, la responsabilidad que se le asigna a la sociedad, bajo el principio de la corresponsabilidad, conforme al cual las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas y naturales, serán parte activa para el logro de los objetivos de la Ley de eliminar la violencia y la discriminación contra las mujeres.

Por tanto, en la legislación colombiana, el Gobierno Nacional es el encargado de formular, aplicar, actualizar estrategias, planes y programas para la prevención y erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, también a través de los programas de difusión del Ministerio de Comunicaciones, fomentando la igualdad entre hombres y mujeres. Se implementan medidas educativas, laborales, de salud, sobre los deberes de la familia y las obligaciones de la sociedad.

2.4.3.5. En Ecuador

Con fecha 11 de febrero de 1995, se publicó la Ley N° 103, Ley contra la violencia a la mujer y la familia. En la legislación ecuatoriana no se han adoptado de manera literal medidas de sensibilización contra la violencia de género, sin embargo la norma analizada persigue proteger de todo atentado contra sus derechos a la mujer y su entorno familiar.

En dicha Ley, se le asigna a la Dirección Nacional de la Mujer, entre otras facultades, la de dictar políticas, coordinar acciones y elaborar los planes y programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia; en este mismo propósito programara, organizara y ejecutara actividades educativas para padres y hogares.

La norma faculta a la Dirección Nacional de la Mujer, impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de género para el personal competente con la Función Judicial y Ministerio de Gobierno.

En tal sentido, se concluye Ecuador, en su legislación no incorpora literalmente medidas de sensibilización contra la violencia de género; sin embargo, sus normas protegen la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia.

La Ley ecuatoriana le asigna a la Dirección Nacional de la Mujer, la facultad de dictar políticas, coordinar acciones y elaborar los planes y programas de capacitación con perspectiva de género, tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia; en este mismo propósito se dispone programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y hogares.

2.4.3.6. En España

Ley Orgánica N° 1/2004, fue publicada el 28 de diciembre 2004. Esta contiene un conjunto de disposiciones orientadas a fortalecer las medidas de sensibilización de la ciudadanía sobre prevención contra la violencia de género.

Se dota a los poderes públicos, de instrumentos para luchar contra este tipo de violencia en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitarios, publicitarios y mediáticos.

La Ley contempla la puesta en marcha de un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, promoviendo valores basados en el respeto a los derechos y libertades fundamentales desde la perspectiva de género.

Para la promoción del derecho de igualdad entre hombres y mujeres, la norma analizada establece que los poderes públicos, conforme a sus atribuciones y competencias, impulsaran campañas de información y sensibilización concretas, con el fin de evitar la violencia de género, pero además garantizar la incorporación en estas campañas a las personas con discapacidad.

En conclusión, la legislación española, contempla la puesta en marcha de un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, promueve valores basados en el respeto a los derechos y libertades fundamentales desde la perspectiva de género. Los poderes públicos, conforme a sus atribuciones y competencias, impulsan campañas de información y sensibilización concretas en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitarios, publicitarios y mediáticos, con el fin de evitar la violencia de género.

2.5. HIPÓTESIS

2.5.1. Hipótesis General

La política de Estado de sancionar con pena privativa de libertad efectiva los delitos de violencia en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar no sería la solución para prevenir y erradicar dicho problema social, toda vez que los índices de violencia se han incrementado a nivel nacional.

2.5.2. Hipótesis Específica

Sancionar con pena efectiva una agresión levísima producida entre miembros de una familia, no resultaría compatible con los principios político-criminales, dado que básicamente, se vulnera el principio de proporcionalidad y de *última ratio*.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO

3.1.1. Enfoque

- Cualitativo; porque se busca explicar los efectos de la variación legislativa del artículo 57° del Código Penal, mediante la cual se establece que debe aplicarse pena privativa de libertad efectiva a quienes hayan sido condenados por el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.

3.1.2. Diseño

- Es descriptivo, ya que se analizará y buscará recolectar información que permita desarrollar lo relacionado sanción en casos de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, con la finalidad de buscar medias más efectivas que contribuyan a controlar y prevenir dicho problema social. Además, esta investigación se basará en un Diseño Documental, el cual consiste en un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales como son: impresas, audiovisuales o electrónicas.

3.2. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

- **Analítico**, pues, se divide intelectualmente el objeto de estudio para examinar y entender cada una de sus partes.

- **Inductivo**: Este método va de lo particular a lo general; es decir, analiza de forma independiente cada una de las partes del trabajo de investigación, se obtendrá de forma global, cuáles son los efectos que implica la aplicación de la pena privativa de libertad a quienes sean condenados por el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.

- **Inferencial**: Este método permite realizar la inducción y la deducción en el proceso de análisis y síntesis de los hechos y fenómeno que se investiga.

- **Hermenéutico Jurídico**: Este método permitirá interpretar la normatividad nacional e internacional sobre el tema planteado.

- **Comparativo**: Este método permitirá realizar una comparación o contrastación de las normas de derecho comparado referidas al tema, observando las formas en que han sido incorporados a los sistemas de cada país.

- **Sistemático**: Está orientado a establecer un significado de una norma legal a interpretar, partiendo de un análisis integral con otras normas que tengan relación dentro del mismo cuerpo legal o textos legales supletorios.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

- Fuentes Directas: Constitución Política del Perú, Código Penal, Código Procesal Penal, Ley 30710, que modifica el artículo 57 del Código Penal, Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, Doctrina, artículos jurídicos publicados en Gaceta Jurídica, Actualidad Jurídica, Libros especializados, internet, notas periodísticas, entrevistas, entre otros.

- Técnicas: La técnica a emplearse será aquella que privilegie los documentos, a fin de analizar minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de investigación. Las técnicas a emplearse son las siguientes:

5. Fichaje: a través del fichaje bibliográfico se compilará todo lo que se ha escrito directa o indirectamente sobre el etiquetado de productos, sus críticas y defensas, llegando a tener una postura respecto a la investigación.

6. Recolección y Análisis de datos: por medio de esta técnica se analizará minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de nuestra investigación.

- Procesamiento de información: La información se procesará de acuerdo a los logros obtenidos mediante las técnicas, fuentes e instrumentos empleados para la recolección de la información.

- Análisis y presentación de datos y resultados: Los datos obtenidos se analizarán detalladamente con la finalidad de dar validez a la hipótesis planteada.

3.4. ASPECTOS ÉTICOS

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACION

Yo: **KAREN YESSENIA GUERRERO PEÑA** identificada con DNI N° **48134565**, en la condición de Egresada, de la Facultad de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**, Escuela Profesional de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS** y domiciliada en **AA.HH. Las Mercedes Mz A1 LOTE 02** Distrito de Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura, Celular: **969588830**, Email: **karenz-1994@hotmail.com**.

DECLARO BAJO JURAMENTO: que el trabajo de investigación que presento a la Oficina Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de investigación desarrollado, y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. N° 411, del Código Penal concordante con el Art. 32° de la Ley N° 27444, y Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor. En fe de lo cual firmo la presente.



Piura, diciembre de 2018


Karen Yessenia Guerrero Pena
DNI N° 48134565

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Art. 4. Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales –RENATI Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD

CAPÍTULO IV

PROBANZA DE LA HIPÓTESIS

4.1. Probanza Jurídico-Doctrinal

A. La política de Estado de sancionar con pena privativa de libertad los delitos de violencia en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar y la solución para prevenir y erradicar dicho problema social.

Las normas contenidas en nuestro ordenamiento constitucional, establecen la obligación del Estado peruano de poner en funcionamiento toda la maquinaria estatal para hacer viable el respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

Los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, suscritos por el Perú, así como los lineamientos establecidos por los organismos internacionales son claros respecto a las acciones que compete al Estado adoptar para combatir y eliminar la violencia familiar. El Perú ha acogido significativas sugerencias para dar cumplimiento a los derechos a una vida sin agresión, sin discriminación y por ende, a la igualdad.

En ese sentido, en noviembre del 2015, se aprobó la Ley N° 30364 en el contexto además, de la marcha Ni Una Menos realizada a nivel nacional, la cual buscó que las denuncias por violencia contra la mujer sean atendidas y los procesos sean menos engorrosos. Posteriormente, el 30 de setiembre de 2016, mediante Ley N° 30506, el Congreso de la República delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo, el mismo que, ante la necesidad de contar con normas que contribuyan a fortalecer la lucha contra el feminicidio, violencia familiar y la violencia de género, aprobó el Decreto Legislativo N° 1323.

El Decreto Legislativo fue publicado el 06 de enero de 2017, y con él se introdujeron varias reformas al Código Penal. Una de ellas fue la incorporación del artículo 122-B al Código Penal, tipificándose las agresiones en contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual, cuya sanción aplicable era entre uno y tres años de pena privativa de libertad.

Posteriormente, el 29 de diciembre de 2017, se publicó la Ley N° 30710, mediante la cual el Congreso de la República modificó el último párrafo del artículo 57 del Código Penal, estableciendo que la suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable para las personas condenadas por el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar que regula el artículo 122-B del mismo cuerpo normativo.

Por ello, teniendo en cuenta la fecha en que se realizó tal variación legislativa, fue necesario investigar el número de casos denunciados ante el Ministerio Público de Piura, desde julio de 2017 hasta el mes de junio de 2018, a fin de determinar si dicha ley, publicada el 29 de diciembre de 2017, ha resultado idónea para combatir y erradicar la violencia familiar en nuestra sociedad. Los resultados obtenidos son los siguientes:

DISTRITO FISCAL PIURA
ESTADISTICA DE CASOS CON DELITO DE LESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR (ART. 122-B C.P)
F. CORTE 04/10/2018

AÑO	MES	CASOS
2017	Julio	504
	Agosto	194
	Septiembre	194
	Octubre	68
	Noviembre	253
	Diciembre	261
2018	Enero	183
	Febrero	114
	Marzo	224
	Abril	383
	Mayo	328
	Junio	329
TOTAL		3035

FUENTE : SGF

ELABORACION : AREA DE GESTION DE INDICADORES

En base a la prohibición a los operadores jurídicos de aplicar una pena suspendida y la consecuente obligación de imponer pena privativa de libertad, se puede precisar que esta política de venganza o retribución no es una solución adecuada frente a la violencia familiar, teniendo en cuenta el marco de respeto a los derechos fundamentales que toda política pública debe respetar.

En tal sentido, el artículo 57° del Código Penal establece taxativamente el conjunto de criterios que deben cumplirse para la aplicación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, centrándose principalmente en los siguientes requisitos: *“1. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años. 2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial requiere de debida motivación. 3. Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual (...)”*

Teniendo en cuenta estos requisitos, el Juez analizará el caso en concreto y bajo criterios objetivos, infiere razonablemente que el sentenciado no volverá a cometer un nuevo delito, por lo que la aplicación de pena privativa de libertad efectiva sería innecesaria. En base a ello, y en concordancia con criterios adicionales, se podrá aplicar la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

La aplicación de este tipo de medida, no significa que se genere una situación de impunidad porque el condenado no será internado en un establecimiento penitenciario; y ello se explica porque la pena suspendida se aplicará después de determinar si una persona es responsable de un determinado delito. Tampoco se trata de una medida que deba aplicarse automáticamente, sino que exige al Juez el análisis de la naturaleza y modalidad del hecho punible, así como el

comportamiento procesal y la personalidad del agente, e incluso exige que el sujeto no tenga la condición de reincidente o habitual.

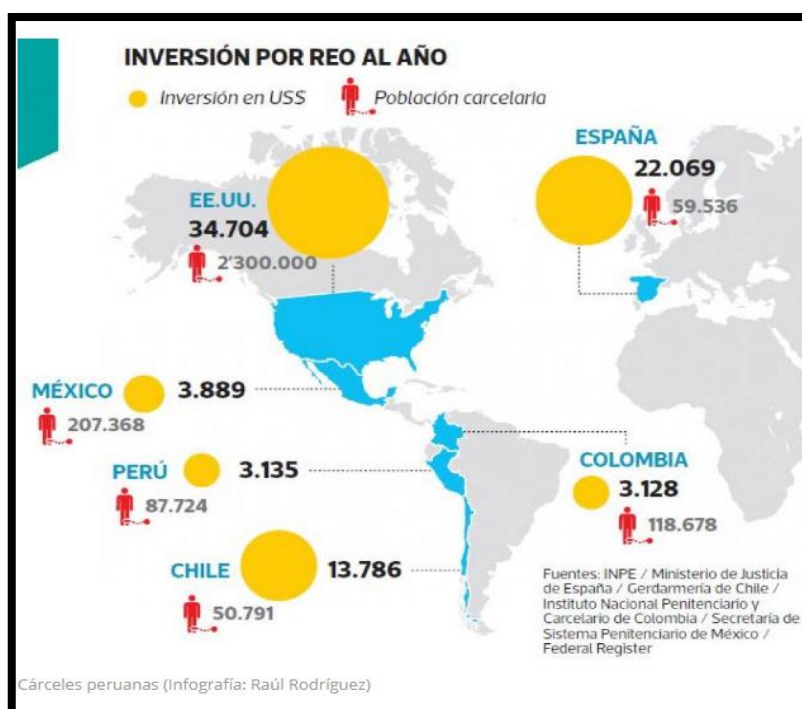
En tal sentido, se debe precisar que no es acertado que se niegue al Juez la facultad de valorar si es que en un caso concreto es adecuado o no que se aplique la suspensión condicional de la ejecución de la pena en tanto se cumplan los requisitos del artículo 57 del Código Penal. Y ello, se debe a que con la variación legislativa que se está analizando, no solo le resta facultades al órgano encargado de velar por la imposición y ejecución de la pena, sino que dificulta la consecución de la rehabilitación del penado a la vida en libertad aun cuando presenta determinadas condiciones personales que permiten inferir que no volverá a cometer un nuevo delito.

Por tanto, la respuesta ofrecida por el Estado debe ser de carácter integral y no restringida o limitada al incremento del rigor punitivo.

Conforme lo señala (MEINI, 2014), la prevención del delito no solo no es competencia exclusiva del derecho penal, sino que las posibilidades que este tiene de incidir en la prevención de delitos es muy reducida. Así lo demuestra, por un lado, el escaso éxito de la pena como remedio del delito (la pena no resocializa ni intimida); y, por otro lado, el hecho que la prevención de delitos demanda la implementación de políticas públicas que incentiven al ciudadano a decidirse por alternativas distintas al delito para la satisfacción de sus necesidades.

Al respecto, es necesario precisar que uno de temas directamente relacionado a la aplicación de pena privativa de libertad efectiva, es el presupuesto del Estado.

(MACERA, 2018), indica que el cálculo en base al presupuesto anual del INPE y a la población penal indica que el Estado dedica alrededor de US\$3.135 anuales por reo, es decir, S/ 28 diarios. Este monto debe cubrir alimentación, seguridad, limpieza, educación, entre otros aspectos. De acuerdo con el ex presidente del INPE Carlos Vásquez, de esta última cifra, lo único que se puede dar como un hecho es que el Estado destina S/4,5 por alimentación para las tres comidas diarias. Y si bien el gasto anual es comparable con el de países como Colombia (US\$3.128) o México (US\$3.889), difiere de países como Chile (US\$13.786), España (US\$22.069) o Estados Unidos (US\$34.704), que lo superan ampliamente.

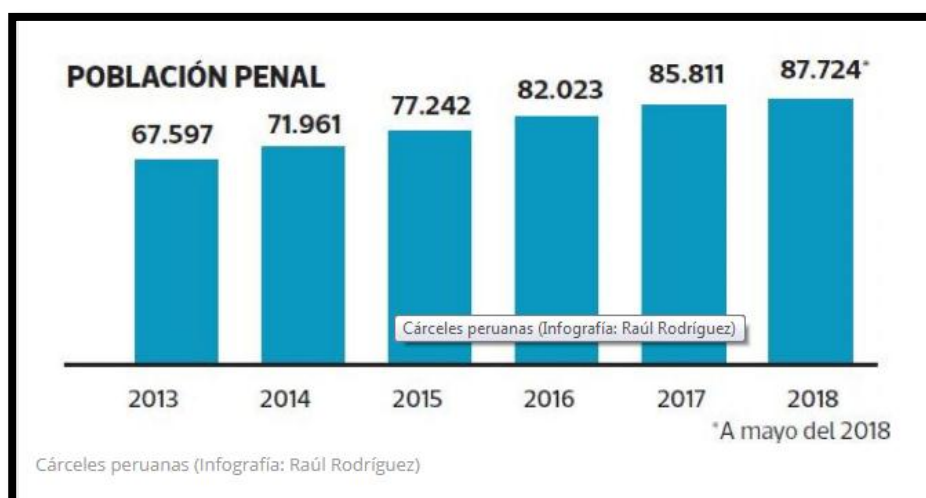


Dichas cifras no significa necesariamente que ingresan cada vez más internos, sino que con el incremento de las penas y la reducción de beneficios, cada vez salen menos personas. Además, se debe tener en cuenta que los costos por encarcelar a una persona tiene una doble ramificación, dado que por un lado, el ciudadano pasa de ser una unidad económica productiva a una que hay que mantener y, por otro lado, están los costos sociales, por ejemplo, el aumento de la criminalidad o mortalidad infantil por abandono, etc.



Según, Andrew Gilmour, especialista en programas de cárceles productivas y presidente ejecutivo de G2 Security LLC, la situación carcelaria del Perú crea pequeños universos criminalísticos donde el prisionero no se reforma, sino que puede salir mental y físicamente dañado.

Teniendo en cuenta las cifras de mayo de 2018, al Estado peruano le cuesta S/1.359.904 anuales mantener sólo a la sobrepoblación penal. A fines del 2018, y de seguir la tendencia de crecimiento, la cifra será mayor, situación que incrementa la imposibilidad de lograr la readaptación y resocialización de los internos.



B. La sanción de pena efectiva aplicable a una agresión levisima producida entre miembros de una familia y su compatibilidad con los principios político-criminales.

La utilización del Derecho penal como primera herramienta ante grandes problemas sociales no es una práctica privativa propia de los últimos tiempos. Es común que si la tasa de criminalidad aumenta, lo primero que se proponga como solución es la elevación de las penas, la innecesaria creación de nuevos tipos penales o el endurecimiento de las normas procesales concernientes a una determinada clase de delitos. Así, el uso simbólico del Derecho penal parece siempre tener más acogida que una política social a largo plazo que trate las verdaderas causas del problema.

El inconveniente de ello, es que el Derecho penal resulta insuficiente para la resolución de estos grandes problemas sociales, pudiendo hacer poco o nada en contra de las reales causas de tal problemática. Entonces se forma un círculo vicioso, en el que el empleo del Derecho penal, que debiera ser subsidiario, se termina desacreditando dada las reducidas posibilidades que este tiene de incidir en la prevención de delitos (MEINI, 2014).

(CANEVALI, 2008) Es cierto que el Derecho penal debe hacer frente a tales peligros, pero también se corre el riesgo de que dicha barrera protectora se adelante de tal manera que termine castigando conductas que perfectamente pueden ser comprendidas en otra esfera sancionatoria, como puede ser el Derecho administrativo sancionador. Es preciso pues, tener cuidado ante la creciente tendencia de incriminar los llamados delitos de víctima difusa, ya que ponen de manifiesto más bien objetivos de organización política, económica y social, y sólo de forma lejana se afecta al individuo. Es pues, tarea del teórico destacar cuándo se está frente a tendencias político criminales irracionales, para evitar que éstas se constituyan en una constante. Es decir, el camino incorrecto sería desconocer, sin más, estas tendencias. Por el contrario, su deber es enfrentarlas para así indicar criterios de racionalización. Lo que no puede hacer la ciencia penal es alejarse de la praxis, sosteniendo, simplemente, que se trata de manifestaciones legislativas irreflexivas, que no merecen la atención.

Ello no significa que las grandes preocupaciones como la inseguridad ciudadana o la violencia contra la mujer sean problemas intrascendentes para el Estado peruano, ni que a priori sea ilegítima cualquier intervención del Derecho penal; sin embargo, es necesario mencionar que se debe ser cuidadoso al momento de determinar qué clase de medidas se propondrán para hacer frente al fenómeno de la criminalidad y, sobre todo, que tal decisión se realice a partir de un análisis detenido sobre las consecuencias que el uso del *Ius Puniendi* podría provocar en los derechos de los individuos, por lo que siempre debe responder a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Una muestra de este fenómeno es lo ocurrido con las propuestas de lucha frente a la violencia contra la mujer que surgen ante el reclamo social, así es cada vez es más común encontrar titulares en los medios de comunicación social en los que se reclama sanciones ejemplares, aumento de penas o se promueve la utilización de la prisión preventiva como adelanto de pena ante esta clase de hechos o incluso se implementa el uso de recompensas para la captura de los agresores, como medidas eficaces para evitar este tipo de hechos.

Sin embargo, con ello se olvida que para el Estado las penas no solo deben ser eficaces sino también proporcionales, es decir, que haya relación entre el daño ocasionado y el grado de responsabilidad del condenado. En esta ponderación, resulta evidente que debe tomarse en cuenta los efectos negativos asociados al encarcelamiento efectivo en ciertos supuestos que se caracterizan no solo por tratarse del cumplimiento de sanciones de mediana o corta duración, sino de unos que, en atención a las circunstancias específicas del caso y a las condiciones personales del condenado, se pueda colegir razonablemente que la persona condenada no delinquirá nuevamente.

La imposición de una pena efectiva en tales supuestos resulta contraproducente incluso para la rehabilitación del sancionado, pues se somete a este individuo a una prisión que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad ni favorece el desarrollo de actividades de tratamiento tendiente a su rehabilitación, de tal manera que se promueve más bien la desocialización de dicha persona, al someterla a condiciones inapropiadas para su reincorporación a la vida en libertad (SMALL, 2017).

(BUSTOS, 2012) El control penal, la pena, sólo es una amarga necesidad, esto quiere decir entonces en relación al proceso, que el Juez ha de tener claro que la pena es una cuestión de necesidad y no de legitimidad. Luego, el delito y el delincuente no es una cuestión ontológica ni metafísica ni de ciencia natural ni hay delincuente por naturaleza, sino que el delito y el delincuente es un problema de definición política. Es un problema en relación a las necesidades que surgen dentro de un sistema democrático; ello implica que el Juez penal ha de estar plenamente consciente que el Derecho Penal es extrema ratio, esto es, un control extremadamente formalizado del Estado que sólo se aplica en último término cuando han fracasado todos los otros controles. De esto se desprende el carácter subsidiario y con ello la interpretación estricta conforme al principio de legalidad. Esto ha de llevar al Juez penal a desechar desde el principio de su investigación, ya sea al Juez o al Ministerio Público según sea el tipo de procedimiento, todo aquello que pueda ser solucionado por vía sancionatorias civiles, comerciales o administrativas.

El derecho penal nació con la visión de ser la última opción para un Estado democrático de castigar y sancionar acciones antisociales, y evitar caer a un “estado de naturaleza”. Esta visión del derecho penal como “*ultima ratio*”, es la que advierte que intentar solucionar todos los conflictos sociales mediante la imposición de penas, es la mejor demostración de la pérdida de visión y sentido democrático de un país.

Si nos ponemos a pensar, el conflicto familiar surge por motivos personales y psicológicos de cada miembro del grupo familiar, llámense celos, llámese control, llámese amor romántico, cualquier calificativo que se desee utilizar y el cual legitima la existencia de este tipo de violencia. La responsabilidad y la culpa de la violencia en la familia, tiene que ver con la educación, la formación en valores y visión de la sociedad. Se puede afirmar que el Perú es un país abiertamente machista, que mediante el uso y manipulación de medios de comunicación y religiosos, fomenta sin reparo alguno una especie de superioridad masculina.

El problema de la violencia contra la mujer y la que se produce en el interior de la familia es un problema de sociedad como tal, no son culpables personas en específico o instituciones del Estado. De este fenómeno, somos responsables todos; intentar solucionar este mal mediante el derecho penal no haría otra cosa más que agravar los problemas que nos aqueja.

CONCLUSIONES

1. La política de Estado de sancionar con pena privativa de libertad efectiva los delitos de violencia en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar no es la solución para prevenir y erradicar dicho problema social, toda vez que los índices de violencia se han incrementado a nivel nacional.

Si bien la evaluación de las cifras registradas, permite determinar el incremento de la violencia familiar en el Distrito Fiscal de Piura, es necesario tener en cuenta que los datos registrados no necesariamente demuestran la cifra real de la problemática en la provincia, ya que éstos no van acompañados de otras fuentes e indicadores que permitan apreciar su verdadera magnitud, como por ejemplo, el número de casos atendidos en comisarías, los centros de salud, o de denuncias presentadas ante DEMUNA, las investigaciones desarrolladas por las instituciones privadas de protección de los derechos de la mujer, entre otros. Por tanto, la criminalización de conductas y el endurecimiento de penas no ha tenido los efectos esperados.

2. Sancionar con pena efectiva una agresión levísima producida entre miembros de una familia, no resulta compatible con los principios político-criminales.

Este tipo penal resulta incoherente con los principios generales del derecho penal y los límites o garantías penales. Después de analizar el delito materia de investigación, se tiene que se han criminalizado conductas que anteriormente, eran consideradas faltas contra la persona; sin embargo, lejos de contribuir a la erradicación de la violencia familiar, ésta se ha incrementado. En tal sentido, es importante y adecuado que el Estado peruano brinde una respuesta que sea respetuosa de las garantías penales, que se enlace con una política criminal que garantice la incolumidad de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

RECOMENDACIONES

1. La sociedad civil debe de colaborar con la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, discriminación de género y el delito de feminicidio; impartiendo valores en sus hogares y en la comunidad, buenas prácticas, solidarizándose con las víctimas y denunciando a los agresores.

Además, el Estado peruano debe fomentar y diseñar programas de educación que sean aplicables a todo el proceso educativo, que contribuyan a disminuir perjuicios, costumbres y ciertas prácticas basadas en la idea de inferioridad de la mujer. De esa forma se podría cambiar de patrones culturales y así lograr un trato igualitario entre varones y mujeres.

Por tanto, el legislador no debe concebir a las normas penales como la única solución a los conflictos sociales, por consiguiente debe dejarse de lado la tendencia político-criminal de atribuirle al Derecho Penal una función pedagógica para transmitir a la sociedad el mensaje de que cualquier acto en agravio de la mujer o algún integrante grupo familiar, está totalmente prohibido.

2. El Estado debe crear políticas públicas que, desde un enfoque de Derechos Humanos, se orienten a la adecuada prevención de toda forma de violencia contra la mujer y grupo familiar. De ningún modo es recomendable esperanzarse o confiarse en los supuestos efectos intimidatorios que la pena podría provocar en el ciudadano o agresor, pues las estadísticas nacionales han demostrado el endurecimiento del sistema penal no coadyuva a la mejor prevención o disuasión del delito bajo análisis.

En ese sentido, es recomendable que en el proceso de creación de normas penales deben intervenir especialistas en materia penal y ser conducida por políticos conscientes de la importancia de su labor como representantes del pueblo. De ello dependerá la construcción de un sistema político criminal respetuoso de las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y las libertades individuales propias de un Estado de derecho y de un derecho penal moderno y liberal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Exp. N° 5854-2005-PA/TC, Exp. N° 5854-2005-PA/TC (Tribunal Constitucional 08 de Noviembre de 2005).

Exp. N°00033-2007-PI/TC, Exp. N°00033-2007-PI/TC (Tribunal Constitucional 13 de Febrero de 2009).

BENDEZÚ, B. R. (2015). *Delito de Feminicidio: Análisis de la violencia contra la mujer desde una perspectiva jurídico penal*. Lima: ARA Editores E.I.R.L.

GARCÍA, C. P. (2012). *Derecho Penal. Parte General I*. Lima: Jurista Editores.

MACERA, D. (12 de Agosto de 2018). Cárceles peruanas: Estado invierte US\$3.135 anuales por cada reo. *El Comercio*.

MECA QUEREVALU, M., & TEMOCHE QUEZADA, G. (2015). *El debido proceso en la Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial frente al Derecho de Identidad*. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Piura, Piura.

MEINI, I. (2014). *Lecciones de Derecho Penal. Parte general. Teoría jurídica del delito*. Lima: Fondo Editorial PUCP.

ORNA, S. O. (2013). *Factores determinantes de la violencia familiar y sus implicancias*.

Poder Judicial del Perú. (31 de Julio de 2018). *Diccionario Jurídico*. Obtenido de Poder Judicial del Perú: <http://historico.pj.gob.pe/servicios/diccionario/diccionario.asp>

REBAZA MARTELL ALEJANDRO, CRUZ SANDOVAL GONZALO, MALDONADO PEREZ JENNIFER. (2016). DEFINICIONES JURIDICAS. 39- 652.

REBAZA MARTELL, Alejandro; CRUZ SANDOVAL, Gonzalo y MALDONADO PEREZ, Jennifer. (2016). *DEFINICIONES JURIDICAS*. LIMA: FFECAT.

REYNA, M. M. (2017). *Eficacia de la Ley N° 30364 en la disminución de la violencia contra la mujer en relación a la Ley N° 26260 en el Distrito de Nuevo Chimbote 2016*. <http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10269>.

RUBIO CORREA, M. (2000). *Estudio de la Constitución Política de 1993*. Lima: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU.

RUIZ PEREDA, Dennis & VIZCONDE CIPRIANO, Harish. (2016). *Derecho a la Identidad como objeto de Protección de la Ley N°28457 que regula el proceso de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial*. Tesis para optar por título de abogado, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS, Trujillo.

SILVA, M. M. (2018). *Mujer, Grupo Familiar, Violencia y Derecho*. Lima: Librejur.

SMALL, A. G. (2017). *Situación Carcelaria en el Perú y Beneficios Penitenciarios*. Lima: Grijley.

TORRES, V. A. (2011). *Introducción al Derecho. Teoría General del Derecho*. Lima: IDEMSA.

VARSÍ ROSPIGLIOSI, E. (08 de agosto de 2017). *ALCANCES Y LÍMITES DE LA LEY QUE MODIFICA EL PROCESO DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL*. Obtenido de sitio web Legis.pe.

VENTURA, D. B. (2016). *El proceso de violencia familiar, como garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género en el Segundo Juzgado de familia de Huánuco, 2014*.

VILLARREAL CORDOVA, Z. J. (2017). *La Determinación de la Filiación Biológica, en la Maternidad Subrogada, en su variante Heteróloga*. (Tesis para obtener título de abogado), Universidad Nacional de Piura, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Piura.

ANEXOS

1. MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA

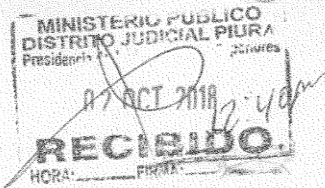
Título del Proyecto:

“LA PENA EFECTIVA EN EL DELITO DE AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE PIURA”

Nombre del Tesista:

Karen Yessenia Guerrero Peña

	PREGUNTAS	HIPÓTESIS	OBJETIVO
General	¿La política de Estado de sancionar con pena privativa de libertad efectiva los delitos de violencia en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar es la solución para prevenir y erradicar dicho problema social?	La política de Estado de sancionar con pena privativa de libertad efectiva los delitos de violencia en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar no sería la solución para prevenir y erradicar dicho problema social, toda vez que los índices de violencia se han incrementado a nivel nacional.	Analizar si la política de Estado de sancionar con pena privativa de libertad efectiva los delitos de violencia en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar sería la solución para prevenir y erradicar dicho problema social.
Específica	¿Sancionar con pena efectiva una agresión levísima producida entre miembros de una familia, resulta compatible con los principios político-criminales?	Sancionar con pena efectiva una agresión levísima producida entre miembros de una familia, no resultaría compatible con los principios político-criminales, dado que básicamente, se vulnera el principio de proporcionalidad y de <i>última ratio</i> .	Determinar si sancionar con pena efectiva una agresión levísima producida entre miembros de una familia, resulta compatible con los principios político-criminales.



SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM)

MINISTERIO PÚBLICO
Fiscalía de la Nación

FORMULARIO

N° DE REGISTRO

I.- FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN

Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Piura

II.- DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos y Nombres / Razón Social: GUERRERO PEÑA KAREN YESSANIA
Documento de Identidad: D.N.I / L.M / Otro: 43134565

DOMICILIO

Av./Calle/Jr./Psj	N°/ Dpto / Int	Distrito	Urbanización
	MZ A1 LOTE 02	CASTILLA	LAS MERCEDES
Provincia	Departamento	Correo electrónico	Teléfono
PIURA	PIURA	Karen2994@hotmail.com	969583830

III.- INFORMACIÓN SOLICITADA:

Número de casos ingresados mensualmente del delito de Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar (art 122-B del Código Penal), desde julio de 2017 hasta junio de 2018.

IV.- DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN:

DISTRITO FISCAL DE PIURA

V.- FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (marcar con X)

COPIA SIMPLE	DISKETTE	CD	<input checked="" type="checkbox"/>	CORREO ELECTRÓNICO	OTRO
--------------	----------	----	-------------------------------------	--------------------	------

APELLIDOS Y NOMBRES GUERRERO PEÑA KAREN YESSANIA FIRMA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
--	---------------------------

OBSERVACIONES.....

APÉNDICE

**DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1323**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30506, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de PETROPERÚ S.A., por un plazo de noventa (90) días calendario;

Que, en ese sentido, el literal a) del numeral 2 del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana; así como modificar la legislación penal y procesal penal y de ejecución penal con el objeto de revisar la regulación vigente del delito de feminicidio y sus agravantes, la terminación anticipada, la confesión sincera; y la regulación vigente de los beneficios penitenciarios para combatir la violencia familiar y la violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, independientemente del vínculo de parentesco con los agresores y víctimas de los mencionados delitos;

Que, resulta necesario incorporar en la legislación penal precisiones normativas a fin de fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, y se proteja de modo efectivo a los grupos vulnerables de mujeres, niñas, niños y adolescentes de la violencia familiar y cualquier otra forma de violencia y discriminación, siendo además necesario la inclusión de medidas orientadas a sancionar las conductas de explotación humana en todas sus formas, por estar directamente relacionadas a estos fenómenos criminológicos;

De conformidad con lo establecido en el literal a) del inciso 2 del artículo 2 de la Ley N° 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A. y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE FORTALECE LA LUCHA CONTRA EL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Artículo 1.- Modificación de los artículos 46, 108-B, 121, 121-B, 122, 124-B, 168, 208, 323 y 442 del Código Penal

Modifícanse los artículos 46, 108-B, 121, 121-B, 122, 124-B, 168, 208, 323 y 442 del Código Penal, en los siguientes términos:

“Artículo 46.- Circunstancias de atenuación y agravación

(...) 2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes:

(...) d) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole. (...)”

“Artículo 108-B.- Femicidio

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos:

1. Violencia familiar;
2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual;
3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente;
4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:

1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor.
2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación.
3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente.
4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación.
5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad.
6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana.
7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108.
8. Cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su cuidado.

La pena será de cadena perpetua cuando concurren dos o más circunstancias agravantes.

En todas las circunstancias previstas en el presente artículo, se impondrá la pena de inhabilitación conforme al artículo 36.”

“Artículo 121.- Lesiones graves

El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones graves:

1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima.
2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente.
3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o se determina un nivel grave o muy grave de daño psíquico.
4. La afectación psicológica generada como consecuencia de que el agente obligue a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual, o pudiendo evitar esta situación no lo hubiera hecho.

En los supuestos 1, 2 y 3 del primer párrafo, la pena privativa de libertad será no menor de seis años ni mayor de doce años, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:

1. La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, magistrado del Tribunal Constitucional, autoridad elegida por mandato popular, o servidor civil, y es lesionada en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas.
2. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición.
3. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima.

4. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía.

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de ocho ni mayor de doce años. En este caso, si la muerte se produce como consecuencia de cualquiera de las agravantes del segundo párrafo se aplica pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años.”

“Artículo 121-B.- Lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar

En los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 121 se aplica pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años e inhabilitación conforme al artículo 36, cuando:

1. La víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B.
2. La víctima se encuentra en estado de gestación;
3. La víctima es el padrastro; madrastra; ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o por afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad; habita en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, o la violencia se da en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B.
4. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación sea de autoridad, económica, laboral o contractual y el agente se hubiera aprovechado de esta situación.
5. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima.
6. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía.
7. Cuando la afectación psicológica a la que se hace referencia en el numeral 4 del primer párrafo del artículo 121, se causa a los hijos, hijas, niñas, niños o adolescentes bajo el cuidado de la víctima de feminicidio, de lesiones en contextos de violencia familiar o de violación sexual.

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever ese resultado, la pena será no menor de quince ni mayor de veinte años.”

“Artículo 122. Lesiones leves

1. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.
2. La pena será privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años si la víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo precedente y el agente pudo prever ese resultado.
3. La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación de acuerdo al artículo 36, cuando:
 - a. La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular o servidor civil y es lesionada en el ejercicio de sus funciones oficiales o como consecuencia de ellas.
 - b. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición.
 - c. La víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B.
 - d. La víctima se encontraba en estado de gestación;
 - e. La víctima es el padrastro; madrastra; ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o por afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad; habita en el mismo hogar, siempre que no medien

relaciones contractuales o laborales, y la violencia se da en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B.

- f. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación sea de autoridad, económica, laboral o contractual y el agente se hubiera aprovechado de esta situación.
 - g. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima.
 - h. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía.
4. La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años si la víctima muere como consecuencia de la lesión a que se refiere el párrafo 3 y el agente pudo prever ese resultado.”

“Artículo 124-B. Del daño psíquico y la afectación psicológica, cognitiva o conductual

El nivel del daño psíquico es determinado a través de un examen pericial o cualquier otro medio idóneo, con la siguiente equivalencia:

- a. Falta de lesiones leves: nivel leve de daño psíquico.
- b. Lesiones leves: nivel moderado de daño psíquico.
- c. Lesiones graves: nivel grave o muy grave de daño psíquico.

La afectación psicológica, cognitiva o conductual, puede ser determinada a través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio objetivo similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas especializadas en la materia, sin someterse a la equivalencia del daño psíquico.”

“Artículo 168.- Atentado contra la libertad de trabajo y asociación

El que, mediante violencia o amenaza, obliga o impide a otro a integrar un sindicato, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.

La misma pena se aplicará al que incumple las resoluciones consentidas o ejecutoriadas dictadas por la autoridad competente; y al que disminuye o distorsiona la producción, simula causales para el cierre del centro de trabajo o abandona éste para extinguir las relaciones laborales.”

“Artículo 208.- Excusa absolutoria. Exención de Pena

No son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil, los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen:

- 1. Los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta.
- 2. El consorte viudo, respecto de los bienes de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de tercero.
- 3. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos.

La excusa absolutoria no se aplica cuando el delito se comete en contextos de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar.”

“Artículo 323.- Discriminación e incitación a la discriminación

El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o cualquier otro motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas.

Si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se realiza el hecho mediante actos de violencia física o mental, a través de internet u otro medio análogo, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36.”

“Artículo 442.- Maltrato

El que maltrata a otro física o psicológicamente, o lo humilla, denigra o menosprecia de modo reiterado, sin causarle lesión o daño psicológico, será reprimido con prestación de servicio comunitario de cincuenta a ochenta jornadas.

La pena será de prestación de servicio comunitario de ochenta a cien jornadas o de cien a doscientos días-multa, cuando:

- a. La víctima es menor de edad o adulta mayor, tiene una discapacidad o se encuentra en estado de gestación.
- b. La víctima es el padrastro, madrastra, ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o por afinidad, pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad, habita en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, y la violencia se da en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B.
- c. Mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación sea de autoridad, económica, laboral o contractual y el agente se hubiera aprovechado de esta situación.”

Artículo 2.- Incorporación de los artículos 122-B, 153-B, 153-C y 168-B al Código Penal

Incorpórase los artículos 122-B, 153-B, 153-C y 168-B al Código Penal, en los siguientes términos:

“Artículo 122-B.- Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar

El que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme al artículo 36.

La pena será no menor de dos ni mayor de tres años, cuando en los supuestos del primer párrafo se presenten las siguientes agravantes:

1. Se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima.
2. El hecho se comete con ensañamiento o alevosía.
3. La víctima se encuentra en estado de gestación.
4. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición.”

“Artículo 153-B.- Explotación sexual

El que obliga a una persona a ejercer actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.

Si el agente comete el delito mediante engaño, manipulación u otro condicionamiento se aplicará la misma pena del primer párrafo.

El consentimiento brindado por el niño, niña o adolescente carece de efectos jurídicos.

La pena privativa de libertad es no menor de quince ni mayor de veinte años, cuando:

1. El agente tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por cualquier motivo, o mantiene con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder u otro que la impulse a depositar su confianza en él.
2. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad.
3. El agente comete el delito en el ámbito del turismo, en el marco de la actividad de una persona jurídica o en el contexto de cualquier actividad económica.

La pena privativa de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, cuando:

1. El agente es ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o por afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad.
2. La explotación es un medio de subsistencia del agente.
3. Existe pluralidad de víctimas.
4. La víctima tiene discapacidad, es menor de catorce años de edad, adulta mayor, padece de una enfermedad grave, pertenece a un pueblo indígena o presenta cualquier situación de vulnerabilidad.
5. Se produzca una lesión grave o se ponga en peligro inminente la vida o la salud de la víctima.
6. Se derive de una situación de trata de personas.

Si se produce la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad es no menor de veinticinco ni mayor de treinta años.

En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11.”

“Artículo 153-C.- Esclavitud y otras formas de explotación

El que obliga a una persona a trabajar en condiciones de esclavitud o servidumbre, o la reduce o mantiene en dichas condiciones, con excepción de los supuestos del delito de explotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.

Si el agente comete el delito mediante engaño, manipulación u otro condicionamiento, se aplicará la misma pena del primer párrafo.

El consentimiento brindado por el niño, niña o adolescente carece de efectos jurídicos.

La pena privativa de libertad es no menor de quince años ni mayor de veinte años, cuando:

1. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad.
2. El agente comete el delito en el marco de las actividades de una persona jurídica o en el contexto de cualquier actividad económica.
3. Si el agente tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por cualquier motivo, o mantiene con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder u otro que la impulse a depositar su confianza en él.

La pena privativa de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, cuando:

1. El agente es familiar de la víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
2. La explotación es un medio de subsistencia del agente.
3. Existe pluralidad de víctimas.
4. La víctima tiene discapacidad, es menor de catorce años de edad, adulta mayor, padece de enfermedad grave, pertenece a un pueblo indígena, es trabajador migrante o presenta cualquier situación de vulnerabilidad.
5. Se produzca lesión grave o se ponga en peligro inminente la vida o la salud de la víctima.
6. Se derive de una situación de trata de personas.

Si se produce la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad es no menor de veinticinco ni mayor de treinta años.

En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11.”

“Artículo 168-B.- Trabajo forzoso

El que somete u obliga a otra persona, a través de cualquier medio o contra su voluntad, a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o no, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años.

La pena será privativa de libertad no menor de doce años ni mayor de quince años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

1. El agente tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por cualquier motivo, o mantiene con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder u otro que la impulse a depositar su confianza en él.
2. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad, y la actividad que desarrolla está prohibida por la ley en razón a su edad.
3. El agente comete el delito en el marco de la actividad de una persona jurídica o en el contexto de cualquier actividad económica.

La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años, en los siguientes casos:

1. El agente es familiar de la víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
2. Existe pluralidad de víctimas.
3. La víctima tiene menos de catorce años de edad, es adulta mayor, tiene discapacidad, padece de enfermedad grave, pertenece a un pueblo indígena, es trabajador migrante o presenta cualquier situación de vulnerabilidad.
4. Se produzca lesión grave o se ponga en peligro inminente la vida o la salud de la víctima.
5. Se derive de una situación de trata de personas.

Si se produce la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco años.

En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11.”

Artículo 3.- Modificación del artículo 8 de la Ley N° 30364

Modifícase el artículo 8 de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en los siguientes términos:

“Artículo 8. Tipos de violencia

Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son:

- a) Violencia física. Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.
- b) Violencia psicológica. Es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.
- c) Violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucren penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.

- d) Violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de:
1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes.
 2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.
 3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
 4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación del artículo 121-A del Código Penal

Derógase el artículo 121-A del Código Penal.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD

Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI

Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO

Ministra de Justicia y Derechos Humanos

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA LAUEZZARI

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1471010-2

LEY 30710

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 57 DEL CÓDIGO PENAL, AMPLIANDO LA PROHIBICIÓN DEL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN DE LA PENA EFECTIVA A LOS CONDENADOS POR LESIONES LEVES CAUSADAS POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Artículo único. Modificación del artículo 57 del Código Penal

Modifícase el último párrafo del artículo 57 del Código Penal, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“Suspensión de la ejecución de la pena

Artículo 57.- Requisitos

[...]

La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384, 387, segundo párrafo del artículo 389, 395, 396, 399, y 401 del Código, así como para las personas condenadas por el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar del artículo 122-B, y por el delito de lesiones leves previsto en los literales c), d) y e) del numeral 3) del artículo 122”.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE

Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA

Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional por el señor Presidente de la República, en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los veintiocho días del mes de diciembre de dos mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE

Presidente del Congreso de la República

MAURICIO MULDER BEDOYA

Tercer Vicepresidente del Congreso de la República

1602018_1